Estudios AHILA de Historia Latinoamericana N.º 9

Editor General de AHILA:

Manuel Chust

Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos

EL LABORATORIO
CONSTITUCIONAL

IBEROAMERICANO: 1807/1808-1830

Antonio Annino y Marcela Ternavasio (coords.)

Estudios AHILA de Historia Latinoamericana es la continuación
de Cuadernos de Historia Latinoamericana

AHILA - IBEROAMERICANA - VERVUERT 2012

El primer constitucionalismo peruano: de Cádiz al primer Congreso Constituyente	135
<i>Gabriella Chiamonti</i>	
Huellas, testigos y testimonios constitucionales: De Charcas a Bolivia 1810-1830	157
<i>Marta Inoziqui</i>	
De la autonomía a la república: el debate constitucional en Chile, 1808-1833	179
<i>Ara María Sáenz</i>	
Constitución y representación: el enigma del poder constituyente en el Río de la Plata, 1808-1830	203
<i>Noemí Galduan</i>	
Os sentidos de Cádiz en Portugal e no Brasil de 1820 a 1823	219
<i>Marta Regina Barbel</i>	
Soberanía y orden en la Banda Oriental del Uruguay. Espacios de frontera y tiempos de revolución	237
<i>Ara Freixa</i>	
Sobre los autores	261

PRESENTACIÓN

Antonio Annino
Universidad de Florencia
 Marcela Ternavasio
Universidad Nacional de Rosario-CONICET

A diferencia de las crisis que afectaron a las monarquías francesa e inglesa, las dos crisis ibéricas ocurridas en 1807-1808 tuvieron una marcada naturaleza constitucional. Las renunciias de Bayona, por una parte, y el traslado de los Braganza a Brasil, por la otra, supusieron problemas totalmente inéditos, no sólo para las tradiciones de ambas monarquías, sino para el regalismo europeo *tout court*. Las crisis fueron tan profundas y prolongadas que moldearon tanto los procesos políticos que hundieron a los dos imperios como las bases de las nuevas unidades soberanas nacidas de dichas crisis. Todo el orbe ibérico, desde las capitales hasta los últimos pueblos perdidos en las sierras americanas, se vio involucrado en una experiencia tormentosa que, además de transformar los cimientos sociales y políticos de aquellos dos grandes conglomerados territoriales bioceánicos, lo convirtieron en un gran laboratorio de experimentación constitucional. Por supuesto que también las demás revoluciones atlánticas vivieron la experimentación de algo tan nuevo como el tránsito de constituciones descriptivas a constituciones prescriptivas, y a veces de manera muy dramática como sucedió en Francia. Sin embargo, el caso ibérico fue más "vasto" por dos razones: por su dimensión espacial y por el cruce de varios proyectos políticos en lucha, desplegados en un contexto de guerras y de hondos procesos de fragmentación territorial, especial-

mente en el área hispanoamericana, aunque siempre latentes en la luso-brasiliana.

El propósito de este volumen es presentar una reflexión de conjunto sobre ese gran campo de experimentación, cuyos límites temporales se ubican, de manera flexible según los casos, alrededor de las tres primeras décadas del siglo XIX. Tal periodización presupone, en primer lugar, señalar la interacción que se dio —a veces voluntariamente y otras no— entre los constitucionalismos históricos ibéricos y los nuevos constitucionalismos escritos. Este fenómeno, que fue mucho menos conflictivo de lo que interpretó la historiografía tradicional, ha sido objeto —como asimismo el tema constitucional en general— de numerosos estudios que han cambiado notablemente nuestro panorama en las últimas dos décadas. Ya no sólo se rescatan las evidentes y significativas transformaciones ocurridas en los idiomas políticos y constitucionales sino también las posibles asimilaciones, superposiciones y tensiones entre conceptos y principios nuevos y viejos. Hoy es más difícil identificar lo radicalmente nuevo cuando se someten a una lectura más ajustada tanto los textos como los mecanismos institucionales que permitieron darles vida en las sociedades. Entre otras cosas porque el “nuevo constitucionalismo” no derogó el orden jurídico del pasado; un dato que instala una serie compleja de interrogantes que todavía esperan respuestas y reflexión.

En segundo lugar, cualquier periodización de estas experiencias implica, precisamente, tomar como base los solapamientos recién señalados y dejar de lado el viejo criterio utilitarista fundado sobre el dualismo “proyectos/resultados”. En este punto es preciso distinguir con determinación entre el gran debate acerca del constitucionalismo desplegado en el mundo ibérico a lo largo del siglo XVIII y el viraje brutal producido a partir de las crisis de 1807-1808. Muchos de los protagonistas intelectuales fueron los mismos, pero los términos del problema cambiaron radicalmente y de una manera imprevista. Desde esa coyuntura se puede hablar de una *nueva* cuestión constitucional y de un campo de estudio igualmente nuevo, definido por las crisis sin precedentes de las monarquías y por las respuestas que, un conjunto muy amplio de actores sociales y políticos, buscaron ensayar para enfrentar primero el gravísimo problema de cómo gobernar la monarquía y luego el no menos complicado problema de cómo gobernar las nuevas repúblicas.

Las contribuciones de este volumen procuran hacer una historia del *trabajo* efectuado por los diversos grupos que habitaron los también diversos y compuestos territorios de ambas monarquías para elaborar aquellas respuestas. No se trata, pues, de una “historia constitucional del primer constitucio-

nalismo”, sino más bien de una historia política de las disputas que provocaron respuestas constitucionales y de los conflictos que tales respuestas también desataron. Colocados en este registro, los ensayos aquí incluidos no toman como punto de partida las “independencias” declaradas respecto de sus antiguas metrópolis —como habitualmente lo hizo la historiografía tradicional—, sino periodizaciones más amplias que revelan un punto importante: la cuestión constitucional y las independencias fueron dos procesos que, aunque íntimamente vinculados, presentan una autonomía histórica e historiográfica que es preciso rescatar.

Desde estos presupuestos, y como coordinadores de este volumen, les propusimos inicialmente a los autores convocados contemplar —en la medida de sus posibilidades— tres nudos del problema. El primero es soberanía y constitucionalismo, dado que *ambas* crisis —la lusitana y la hispánica— pusieron a la orden del día —y de forma inédita— la cuestión de la soberanía. En un contexto en el que nadie tenía la legitimidad para sustituir la antigua, se demostró muy difícil imputar la soberanía a un nuevo sujeto. El segundo nudo es la representación política y el constitucionalismo. Un tema que fue dramáticamente central también en Francia, y que en el mundo ibérico —particularmente en el hispánico— se complicó por los dilemas desencadenados por el primer nudo recién señalado. Si por una parte fue relativamente fácil organizar diversas formas de representación, en villo entre lo antiguo y lo nuevo, su eficacia dependió mucho de su naturaleza territorial, de su perfil corporativo, y de su carácter imperativo. Factores todos que dificultaron la autonomía de las nuevas asambleas. El tercer nudo, llegados a este punto, no podía ser sino el de los territorios y el constitucionalismo; es decir, el de la mayor o menor coincidencia de las nuevas jurisdicciones constitucionales frente a la fuerza de las antiguas jurisdicciones.

Como el lector podrá imaginar, sobre estas bases nos resultó muy difícil definir las “áreas” que habrían de estar aquí representadas, precisamente por la compleja articulación que los tres nudos presentan en la coyuntura tratada. Por otra parte, es bien sabido que los Estados naciones que hoy conocemos y sobre cuyos moldes se construyeron las clásicas historias políticas y constitucionales, fueron construcciones tardías que no se corresponden con las situaciones presentadas en las siguientes páginas. Por el contrario, se trata de áreas muy cambiantes en las que se advierten múltiples superposiciones.

Tales variaciones no sólo dificultaron la “selección” de los “casos” (en la que cabe aclarar no están todas las regiones que podrían haber sido parte de una reflexión en este volumen), sino también el ordenamiento de los ensa-

ynos. Respecto de la primera dificultad, cualquier criterio general que intentáramos adoptar se resiste a la posibilidad de una taxonomía segura. Una primera distinción entre el área lusitana e hispánica dejaría de lado los múltiples cruces entre ellas, como bien demuestran los artículos de Márcia Berbel y Ana Frega. Por otro lado, la clásica clasificación adoptada en los últimos años entre áreas gaditanas y no gaditanas (o dicho en otros términos, entre áreas leales e insurgentes) no sólo excluye al mundo luso-brasileño sino que no contempla las vertiginosas variaciones producidas dentro de ellas, con ciudades que perteneciendo a una misma jurisdicción toman por alguno de estos rumbos, sin contar las disputas entre gaditanos y antigaditanos al interior de ciudades, pueblos e incluso familias. Los posibles “mapas taxonómicos” podrían continuar, exhibiendo cada uno de ellos cuántos procesos y experiencias dejan fuera. Por tal razón, decidimos incluir lo que consideramos “casos significativos” que, sin agotar ni exponer todas las modulaciones que adoptaron los primeros constitucionalismos ibéricos, revelan los nudos problemáticos más acuciantes.

Esperando entonces la pluralidad de superposiciones, intentamos salvar la segunda dificultad señalada, ordenando los ensayos según un criterio “cronológico” que también admite sus problemas y solapamientos. Un criterio cronológico del que escapa el primer ensayo de nuestra autoría. En él procuramos poner en diálogo los problemas —políticos y constitucionales— que debieron enfrentar las monarquías portuguesa y española entre 1807 y 1823, con el objeto de ofrecer una imagen muy general que le permita al lector ubicar tanto los “casos” analizados como las categorías conceptuales en las que se inscriben. Desde esta perspectiva, los tres artículos que le continúan representan los primeros “ensayos constitucionales” escritos de toda el área. Clement Thibaud analiza el caso neogranadino; Inés Quintero y Ángel Rafael Almaraz, el venezolano y Federica Morrelli, el del reino de Quito. Tal como estas contribuciones demuestran, se trata de ensayos que marcan situaciones diferentes tanto respecto de cómo redefiniéron los vínculos con la Corona, como de sus alcances territoriales e incluso de su posibilidad de ser aplicados. De hecho, el Pacto Solemne promulgado en febrero de 1812 en Quito —considerada la primera Constitución de lo que habrá de ser luego Ecuador, según indica Morrelli— nunca pudo ser aplicado por la entrada de las tropas realistas. Una situación que se repetirá en múltiples oportunidades y regiones en todo el período, pero que no oscurece el hecho de ser en estas tres áreas donde se elaboraron documentos constitucionales antes de la sanción de la Constitución de Cádiz.

El artículo de Manuel Chust analiza los debates y realizaciones del congreso constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución gaditana de 1812 y le continúan los ensayos de Ivana Frassetto sobre el caso novohispano; de Gabriella Charamontí, sobre Perú y de Marta Inurozqui, sobre el Alto Perú. Áreas todas donde se aplicó la Constitución de Cádiz con resultados comunes en algunos aspectos y diversos en otros. Entre tales diferencias no se pueden soslayar la experiencia insurgente y sus ensayos constitucionales en México, ni la coexistencia de un constitucionalismo con sede en Cádiz y otro con sede en Buenos Aires para el caso altoperuano, ni tampoco el posterior derrotero peruano, una vez arribados los ejércitos de San Martín y declarada la independencia. Los solapamientos ya señalados son aquí tan evidentes como en las así llamadas áreas bolivarianas.

Chile, a cargo de Ana María Saúven, y el Río de la Plata, analizado por Noemí Goldman, se ubican en el área sammartiniana y representan dos derroteros constitucionales muy distintos. Excluyéndose ambos del orbe gaditano, Chile plantea una articulación entre constitucionalismo, territorio y soberanía que, más allá de ciertos puntos en común, difiere del caso rioplatense, cuya deriva constitucional estuvo atada a la imposibilidad de definir, durante toda la primera mitad del siglo XIX, un nuevo sujeto de imputación soberana.

El libro se cierra con el ensayo de Márcia Berbel sobre Brasil y con el de Ana Frega sobre Uruguay. Si ambas contribuciones están ubicadas al final no es sólo por el criterio cronológico adoptado, sino también porque expresan las confluencias de todos los posibles “mapas taxonómicos” mencionados: muestran el entrelazamiento entre el constitucionalismo gaditano y el lusitano —analizado por Berbel— y el de ambos con el rioplatense —según el estudio de Frega—.

En todos los casos, sin embargo, es posible advertir el formidable dinamismo que asumió el primer constitucionalismo en el mundo ibérico. Un dinamismo que no dejó de sorprender a los propios contemporáneos y que, es preciso recordar, se desplegó en un escenario de guerra permanente. Si bien el gran tema de la guerra no es el objeto de este volumen, el lector podrá advertir su presencia en las siguientes páginas. Y esto es así porque seguramente todos estamos de acuerdo en aceptar que sería imposible hacer la historia del *trabajo* que enfrentaron los actores del temprano siglo XIX para dar respuesta a los nuevos desafíos de la gobernabilidad si no recordamos que ese trabajo lo realizaron a fuerza de constituciones pero también de *bayonetas*.

CRISIS IBERICAS Y DERROTOS CONSTITUCIONALES

Antonio Anino

Universidad de Florencia

Marcela Ternavasio

Universidad Nacional de Rosario-CONICET

Giovanni Sartori afirmó hace ya varios años que, "históricamente, el término 'Constitución' era un vocablo 'vacante' del que se apropió el constitucionalismo en el siglo XVIII para dar la idea de un gobierno de las leyes (no de los hombres) y limitado por las leyes"¹. Como sabemos, esta perspectiva expone un enfoque que, al proceder de la Teoría Política, busca definir categorías y marcar una frontera entre aquello que puede ser o no considerado dentro del constitucionalismo moderno. Una frontera que los historiadores —del derecho, de la política y de los conceptos— se han ocupado en los últimos años de problematizar, al estudiar las múltiples modulaciones y solapamientos de "antiguas" y "modernas" constituciones en los procesos históricos concretos.

No es nuestro propósito analizar aquí tales solapamientos, ni los presu-puestos —descriptivos y prescriptivos— que subtienden a las diversas interpretaciones, ni menos aún intentar definir qué tipo de constituciones se dieron los nuevos países iberoamericanos nacidos de la crisis de comienzos del siglo XIX. El objetivo es otro: reflexionar sobre dicha crisis para establecer ciertos parámetros de comparación entre los derrotos constitucionales del orbe hispánico y lusitano respectivamente.

¹ Sartori (1992: 19).

En esta dirección, la idea de “vacancia” conceptual a la que alude Sartori en la cita inicial nos es útil para establecer una suerte de paráfrasis con otras “vacancias” que definieron aquellos derrotados. A la reflexión, pues, sobre los conflictivos procesos vividos por las dos monarquías ibéricas entre 1807 y 1823 y a la de sus consecuencias en el plano constitucional producidas a ambos lados del Atlántico están destinadas las siguientes páginas².

LA CUESTIÓN NAPOLEÓNICA

La crisis ibérica de 1807-1808 ha sido objeto recientemente de significativas revisiones historiográficas y de importantes debates y polémicas. La naturaleza de dicha crisis, su genealogía en el corto y mediano plazo y su impacto en las revoluciones e independencias americanas son algunos de los temas más transitados. En esta ocasión nos detendremos en ella no para hacer un estado de la cuestión sobre tales debates sino para trazar un horizonte general que permita poner de relieve ciertas cuestiones respecto del tema que nos ocupa.

Para comenzar ese trazado es oportuno recuperar un señalamiento que hiciera hace ya muchos años Jaques Godcehot y recientemente recordado por Andrea Steniam y João Paulo Pimenta: los eventos ocurridos en la Península Ibérica durante aquella coyuntura crucial fueron un parte aguas en la lógica de expansión imperial napoleónica en la medida en que marcó una gran transformación en el enfrentamiento de Francia con Europa³. Tal transformación no se produjo sólo porque aquellos acontecimientos implicaron un repentino y profundo viraje de las alianzas internacionales —y por consiguiente un realineamiento de las relaciones de fuerzas al interior de cada una de las unidades soberanas enfrentadas— sino también por las consecuencias que tuvo en el plano constitucional. Lo ocurrido en la Península Ibérica a partir de la ocupación de los ejércitos franceses sugiere que existe una “cuestión napoleónica” que, a los efectos de nuestro análisis, se podría definir como la de las relaciones que Napoleón Bonaparte instituyó entre imperio y Constitución.

² Este artículo se nutre de innumerables aportes historiográficos producidos en los últimos años. Lamentablemente no podemos hacer justicia a todas las deudas contraídas en las citas bibliográficas. Las que se explicitan en este ensayo son sólo una mínima parte de tales producciones.

³ Godcehot (1969); Steniam/Pimenta (2008: 53-54).

Como es bien sabido, la expansión imperial bonapartista se apoyó en bayonetas como, asimismo, en nuevas cartas constitucionales concedidas u otorgadas a los países vencidos. El constitucionalista Pedro Cruz Villalón ha definido las características comunes del llamado “constitucionalismo napoleónico” plasmado en las naciones satélites como “el ‘noqueo’ de la sociedad estamental, la voluntad de un mismo derecho para todos, la absoluta desconfianza respecto de las libertades individuales y públicas, el principio monárquico apoyado en el Consejo de Estado y en fin, una soberanía tutelada por Francia”⁴.

El binomio expansión imperial y constitucionalismo se quebró, sin embargo, en 1807-1808 por dos situaciones inéditas: por el traslado de la familia real y de toda la corte lusitana a Río de Janeiro y por la inesperada resistencia de los españoles frente a las abdicaciones borbónicas producidas en Bayona. La primera situación reactualizó en Portugal el viejo debate ilustrado sobre la reforma de la monarquía a la vez que desató disputas al interior del *establishment* en torno a diversas alternativas. Contar con una carta constitucional otorgada por Napoleón, resistir la invasión francesa —tal como lo hicieron las juntas creadas entre junio y julio de 1808—, o aceptar la intervención de las tropas inglesas mientras el príncipe regente João VI y sus ministros intentaban salvar la unidad monárquica a miles de kilómetros de distancia de Lisboa, fueron algunas de tales alternativas. La segunda situación también reactualizó el debate ilustrado pero con una variante diferente: la carta otorgada por Bonaparte en Bayona no sólo no logró frenar la revolución nacida en España frente a las abdicaciones sino que impulsó la salida constitucional concretada en Cádiz en 1812.

En perspectiva europea, la crisis ibérica de 1808 constituyó una inédita experiencia en las crisis de los antiguos regímenes del viejo continente. Mientras que en España se pasó de una crisis dinástica a una crisis de la monarquía que derivó en una crisis constitucional, en Portugal, el traslado de la corte desató una crisis política y una redefinición de los centros de decisiones de la Corona. Si bien esta crisis política no siguió en un primer momento las huellas de España, las diversas cronologías de los dos casos ibéricos permiten reubicar la cuestión napoleónica y la cuestión constitucional en un tablero que, como en el del ajedrez, se despliegan distintas estrategias dentro de un mismo juego.

La primera variable a considerar es, por supuesto, la internacional. Las disputas inter-imperiales exhibidas durante todo el siglo XVIII y que encon-

⁴ Cruz Villalón (2007).

traron en la Guerra de los Siete Años, como es bien sabido, un *turning point*, se intensificaron con la Revolución Francesa. El ciclo de guerra total y el entrelazamiento de las rivalidades ya no podían tolerar testigos inocentes. Mientras en un principio, Madrid y Lisboa buscaron susstraerse de lo que parecía ser un conflicto esencialmente anglo-francés, la expansión napoleónica obligó a ambas cortes a posicionarse cada vez más en ese nuevo escenario. Posicionamientos que implicaron disputas, en cada caso, entre facciones proinglesas y profrancesas, cuyas consecuencias no se limitaron a redefinir las alianzas entre potencias, sino que incidieron en el futuro derrotero constitucional del mundo ibérico. En ese contexto, el Tratado de Fontainebleau, celebrado en octubre de 1807 entre Francia y España, marcó la apoteosis de la facción profrancesa liderada por el ministro Godoy en España y el fin de la secular “neutralidad portuguesa” que selló la definitiva mediatización británica en el área lusitana. Una neutralidad que a lo largo del siglo XVIII no dejó de exhibir diversas oscilaciones y que fue formalmente abandonada recién el 1 de mayo de 1808, cuando se declaró la guerra a Francia⁵.

El Tratado aceleró, pues, la concreción de un viejo proyecto de la Corona portuguesa. El traslado de la corte hacia América no fue un plan improvisado—como ha venido a destacar la reciente historiografía luso-brasileña—, sino todo lo contrario. Avenzado en diversas ocasiones y por diferentes motivos desde la independencia de Portugal respecto de España en 1640, la idea del traslado revela la conciencia de la Corona lusitana acerca de su debilidad en el escenario europeo y su contrarrea, la centralidad que tuvo América desde muy temprano para el imperio portugués. Así lo entendió el secretario de Estado de João VI de Portugal—Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares—, cuando afirmó en 1803 que “Portugal no era la mejor ni la parte más esencial de la monarquía” y cuando se abocó en 1807 a organizar el largo viaje por el Atlántico bajo la protección de la escuadra británica. Si el traslado de la corte evitó, entonces, la *vacatio regis* ocurrida en España poco después, no pudo eludir sus consecuencias en la redefinición que habría de sufrir la monarquía y el imperio portugués en el mediano y largo plazo.

Por otro lado, mientras la alianza forjada en Fontainebleau permitió crear la “americanización” de la Corona lusitana, contribuyó a su vez a acelerar la crisis dinástica de los Borbones y la estrategia de Bonaparte respecto del futuro de la Corona española. Seguramente que la reciente experiencia portuguesa colaboró a que dicha estrategia asumiera los rasgos que adoptó;

⁵ Adelman (2007, 2008); Stenian/Pimenta (2008).

esto es, “forzar” las abdicaciones y otorgar una carta constitucional en Bayona. Cabe recordar, en este sentido, que el gobierno francés instalado en Lisboa, apenas João VI abandonó sus costas en noviembre de 1807, planteó el problema de la Constitución de la monarquía. La idea de Junot de convertirse en rey apoyándose en “las antiguas instituciones y en la legislación de Portugal” encontró calurosa adhesión entre muchos reformistas ilustrados y afancesados herederos de Pombal, pero también resistencias en personajes de la primera nobleza del reino que solicitaron a Napoleón “una Constitución y un rey constitucional, que sea príncipe de sangre” de la familia Borbona⁶. Tal solicitud se vehiculizó en abril de 1808, poco después del motín de Aranjuez—que en el mes marzo forzó la renuncia de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando—y poco antes de las famosas abdicaciones de mayo. Una opción constitucional que Napoleón buscó crear en España despejando el tablero de la jugada llevada a cabo por la casa de Braganza. Esta jugada había creado un escenario muy complicado para que el emperador francés pudiera ejercer en Portugal la misma estrategia que venía desarrollando hasta esa fecha en los territorios que caían bajo su dominio. La carta constitucional otorgada a los españoles en el mes de junio en Bayona, en cambio, estuvo precedida por las inéditas abdicaciones, las cuales garantizaban una salida—a la “napoleónica”—que los Braganza habían impedido con su también inédito desplazamiento al Nuevo Mundo. Situaciones inéditas en ambos casos que expresan la diversa naturaleza de las crisis ibéricas y a la vez la confluencia de problemáticas comunes respecto de la cuestión constitucional.

Como es bien sabido, la ilegitimidad de las abdicaciones (que residía en el hecho de que no podía ser un acto unilateral, ya que un rey no podía desahacerse voluntariamente de su propio reino sino con el acuerdo de éste) y las resistencias que desató a través del movimiento conjunta español, provocaron el viraje de la cuestión napoleónica señalado al comienzo y el gran debate sobre la Constitución de la monarquía que culminó con la reunión de las Cortes y la sanción de la Constitución de Cádiz. El movimiento junquista portugués, en cambio, no sólo fue más efímero, sino que no se consumó en una revolución constitucional. El carácter “restaurador” y “conservador” del mismo no deja, sin embargo, de expresar una reacción antifrancesa común, en la que si bien el juntismo español desempeñó un significativo papel en el desencadenado en Portugal, pone al mismo tiempo de relieve el rol de las

⁶ Ramos (2008).

ciudades y pueblos de ambas monarquías frente a las respectivas crisis. Las disputas entre las diversas juntas, su frágil legitimidad por no estar reconocidas por las leyes de la monarquía, las dificultades por unificar un comando centralizado y la continuidad de la figura del monarca como referencia fundamental son, sin dudas, rasgos compartidos en ambos procesos en esos meses⁷. Pero lo que marcaba una diferencia crucial era que si la figura del monarca podía fungir como referencia de la unidad soberana y de la obligación política en el caso lusitano, en el español fungía como referente de unidad frente al invasor francés pero en un contexto de fragmentación de la soberanía en el que la obligación política requería de una nueva invención para garantizarla. La “revolución de nación” en España —como la denominó José M. Portillo Valdés— fue justamente la respuesta a esa situación⁸.

Así, pues, la diversa naturaleza de las “ausencias monárquicas” en la Península explican en gran parte las diferentes derivas constitucionales ibéricas. Una ausencia, la lusitana, que aun cuando garantizó en el corto plazo la legitimidad y unidad de la soberanía monárquica, no dejó de provocar tensiones en el mediano plazo; y otra ausencia, la española, que en su ilegitimidad de origen, no pudo sino provocar en el corto plazo una federalización de la monarquía y una deriva constitucional que no pudo resolver aquella federalización. Ahora bien, si se nos permite por un momento continuar la línea comparativa de las “ausencias”, es oportuno agregar que la huida de Luis XVI disfrazado de siervo en la noche de Varennes no puede asimilarse a la tradicionalmente llamada *fingida* de João VI, por ser ésta un traslado de la sede imperial que, aunque no pudo evitar las acusaciones de “abandono” del reino por parte de algunos sectores peninsulares, mantuvo la unidad monárquica de un imperio bioceánico. La de Varennes puede asimilarse más a la situación española, porque Luis XVI, al huir, se deshizo voluntaria y unilateralmente del reino, minando los fundamentos de la institución monárquica. Pero en este caso, la Asamblea Nacional había podido reivindicar extrosamente la soberanía de la nación en 1789, mientras que en el orbe hispánico de 1808 no existía ninguna asamblea que pudiera rescatar legítimamente la soberanía de una Corona abandonada voluntariamente. En todo caso, había que crear la *ex-post* y a ello se abocaron los españoles en Cádiz, luego de más de dos años de un trono vacante⁹.

⁷ Ramos (2008), Hocqueller (2011), Molner Prada (2007).

⁸ Portillo Valdés (2000).

⁹ Annino (2008).

En este sentido, y regresando a la cuestión napoleónica, se ha afirmado muchas veces que sin la Constitución de Bayona no habría habido Constitución de Cádiz¹⁰. Y en la misma dirección se podría afirmar también que sin la americanización de la monarquía lusitana provocada por la invasión francesa no habría habido en Portugal un debate sobre su Constitución en los primeros momentos ni una crisis constitucional en 1820. El debate producido en 1808 a ambos lados del Atlántico portugués estuvo marcado por la inflexión provocada por Bonaparte: mientras se desplegaban las disputas ya señaladas dentro del *establishment* lusitano en la Península, la corte de Braganza discutía en Río de Janeiro sobre el potencial subversivo de las juntas. Dos alternativas se plantearon en ese momento: o reconocer el gobierno provisional de Porto o seguir un sistema acorde con la antigua Constitución monárquica. La primera estaba apoyada por el conde de Linhares, fiel representante de la facción británica dentro del gabinete, quien se proponía liquidar así el “partido francés” que predominaba en el Consejo de Regencia de Lisboa. La segunda contó con más adhesiones entre los ministros y consejeros del príncipe, quienes sostuvieron que las juntas fomentaban el “gobierno federativo” y la desunión del reino. El éxito de esta última estrategia no derivó, sin embargo, de la lógica política sino de las armas. Lo ocurrido de allí en más en Portugal fue producto del desembarco del ejército inglés en agosto de 1808, cuyo alto mando dio por tierra con las juntas, restableció el Consejo de Regencia y dominó la situación hasta la derrota final de Napoleón¹¹. El gobierno instalado en Río de Janeiro experimentó así una “mediatización” británica de su monarquía, como había experimentado la Corona española la mediatización napoleónica entre 1807 y 1808.

El fin de la era napoleónica y el proceso de Restauración en Europa afectaron de manera muy diferente a las Coronas ibéricas. En España, como sabemos, finalizaba la larga ausencia del rey y con ella la experiencia constitucional gaditana; en Portugal, en cambio, la ausencia del monarca se prolongó y fue a partir de allí cuando la crisis política de la monarquía derivó gradualmente en una crisis constitucional. El creciente resentimiento de los peninsulares lusitanos frente a la americanización del imperio culminó en la reacción de 1820, cuando juntas revolucionarias y liberales exigieron la convocatoria a Cortes y el regreso del monarca. En una suerte de contraste que no deja de señalar consecuencias en el largo plazo, la representación que

¹⁰ Martí (2008).

¹¹ Ramos (2008: 273-275).

tuvieron lusos e hispanos respecto de América definió en gran parte la suerte de ambos imperios. La importancia ya señalada que para los primeros tuvieron sus dominios en el nuevo mundo se institucionalizó a partir de 1808. Esa "parte esencial" a la que hacía referencia el conde de Linhares dejó a los portugueses peninsulares en una situación de debilidad frente a sus colonias, elevadas en 1815 a la condición de reino (hasta ese entonces Brasil era un virreinato) y por lo tanto en el mismo estatus jurídico —reconocido por el Congreso de Viena— de Portugal y los Algarves. En España, por el contrario, los peninsulares, aun cuando declararon a las Indias como "parte esencial e integrante de la monarquía española" en enero de 1809, no abandonaron nunca la percepción de su superioridad metropolitana frente a América. Una percepción que dejaron plenamente demostrada en las Cortes de Cádiz y por cierto en el período de la Restauración monárquica.

De esta manera, si bien el trienio liberal de comienzos de los años 20 unificó, por un lado, los destinos de las dos monarquías ibéricas alrededor de un mismo constitucionalismo, y por el otro, los destinos de sus colonias americanas completándose las independencias en ambas áreas, las derivas constitucionales en el nuevo mundo fueron, como sabemos, diversas. El constitucionalismo republicano en el área hispana —salvo la efímera experiencia iturbidista— y el constitucionalismo monárquico imperial en Brasil marcaron rumbos diferentes. No obstante, como ha destacado la historiografía brasileña en los últimos años, la distinción entre ambos constitucionalismos no debe conducirnos a plantear la idea de un "caso excepcional" para Brasil ni debe ocultar los estrechos vínculos entre ambos procesos de independencia ni los problemas comunes que debieron enfrentar a lo largo del siglo XIX.

NACIONES E IMPERIOS

¿Cuáles fueron esos problemas comunes que compartieron las áreas lusitanas e hispánicas en el campo político-constitucional? Para comenzar se podría afirmar que la cuestión más acuciante luego de 1808 fue, para las respectivas metrópolis, compatibilizar imperio y nación. El trienio liberal de los años 20 reveló, a su vez, el fracaso de ese intento y los rumbos diversos —aunque también entrelazados— que adoptaron ambas áreas.

Las relaciones entre imperio y nación han sido recientemente abordadas por Jeremy Adelman, quien cuestionando las visiones teleológicas afirma que el Estado-nación no debe ser considerado como el sucesor automático y

natural del imperio y que lo que emergió de las revoluciones atlánticas no fue la anátesis de éste, sino su revitalización. Su tesis acerca de que las naciones surgieron como producto de las tensiones causadas por los esfuerzos por redefinir el marco institucional imperial se ajusta, en gran parte, al argumento que intentamos desplegar aquí¹². En primer lugar, porque si regresamos a la "cuestión napoleónica", es evidente que Bonaparte creó el imperio para consolidar la nación —en Francia—, obligando a nuevos equilibrios en las unidades soberanas del continente europeo y provocando profundas crisis en Portugal y España, en pleno proceso de reformas y adaptación de sus monarquías al escenario imperial dieciochesco. En segundo lugar, porque el experimento gaditano de 1812 fue un intento de constitucionalizar el imperio, para salvarlo, creando una nación que abarcara los dominios del orbe hispánico en ambos hemisferios. En tercer lugar, porque Portugal fue el ensayo más novedoso de redefinición imperial luego de 1808. El traslado de la corte braganquina salvó la monarquía y el imperio en el corto plazo para luego dar lugar a un nuevo intento de adaptación imperial, pero esta vez siguiendo las huellas de Cádiz: esto es, creando una nación portuguesa en ambos hemisferios con instrumentos constitucionales.

El fracaso, entonces, en constitucionalizar naciones bioceánicas por parte de los liberales lusos y españoles abrió el tortuoso camino de creación de naciones a ambos lados del Atlántico. Las de Portugal y España siguieron un rumbo común pero a la vez marginal si se las mira en la perspectiva europea del siglo XIX, dominada por el binomio imperio-nación. En la Europa posnapoleónica, los imperios no sólo mostraron una excelente capacidad de convivir con la nación, sino que fueron hijos de la nación nacidos para consolidarlas. Así lo entendía Lord Rosebery (1899) cuando afirmaba que el imperialismo era "un patriotismo más grande" y así lo mostraron los casos de Napoleón III en Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán o la reina Victoria en Inglaterra¹³. España y Portugal, en cambio, luego de las pérdidas de sus respectivas posesiones americanas, no mostraron una articulación similar de aquel binomio, más allá de que la primera mantuvo su condición imperial hasta 1898 y la segunda se expandió en territorio africano en la segunda mitad del XIX. Si se las mira, por otro lado, en perspectiva americana, también exhiben un rumbo común y a la vez diverso respecto del binomio nación-Constitución. Mientras que en el Nuevo Mundo recién

¹² Adelman (2007, 2008).

¹³ Romanello (2010).

emancipado, las diputadas en torno a “qué” tipo de Constitución establecer (monárquica constitucional, republicana, centralista, federal, confederal, liberal, conservadora, etc.) fue foco de grandes conflictos que en muchos casos llevaron a enfrentamientos armados, en las naciones ibéricas peninsulares llegó de las independencias americanas las disputas se desplegaron entre absolutistas y liberales-constitucionalistas, quienes también llevaron sus querrels al plano de las armas.

No obstante, respecto del tema que aquí nos ocupa, es oportuno destacar que ningún imperio había tenido Constitución alguna, mientras que las naciones sí.¹⁴ En este sentido, las nuevas naciones americanas buscaron en las Constituciones un recurso para estabilizar el nuevo orden nacido de la crisis. Hispanoamérica se convirtió, así, en el laboratorio de experimentación constitucional republicana más formidable, y Brasil procuró por varias décadas lograr aquello que no pudieron las antiguas metrópolis ibéricas: compatibilizar imperio y nación bajo un régimen de monarquía constitucional.

Como sabemos, la vocación de “reconquistista imperial” por parte de las Cortes de Lisboa —frente al sentimiento de “ser colonia de una colonia”—¹⁵ consumió la independencia de Brasil y no sólo eso: tal como afirma Pimenta, “terminó creando una idea política propia de Brasil, hasta entonces inexistente”¹⁶. A contrapelo del modelo europeo, se podría afirmar que Brasil proclamó el imperio para crear la nación, capitalizando de esta manera la herencia que había dejado el traslado de la familia real a Río de Janeiro en 1808. Como hemos señalado, la americanización de la Corona lusitana provocó crecientes descontentos en la antigua sede de la monarquía y condujo a la revolución liberal de Porto en agosto de 1820. La exigencia de los revolucionarios peninsulares fue el inmediato regreso del monarca y la reunión de una asamblea constituyente. Dicha asamblea se reunió en enero de 1821 en Lisboa bajo el nombre de “Cortes Constituyentes de la Nación Portuguesa” y asumieron la autoridad soberana de la nación. Como muestra muy bien el ensayo de Márcia Berbel incluido en este volumen, dichas Cortes siguieron el camino gaditano al prever la representación de diputados provenientes de las provincias de Brasil y al adoptar temporalmente la Constitución de Cádiz de 1812 para el área portuguesa.¹⁷ Pero de la misma manera que los liberales

¹⁴ Annino (2008).

¹⁵ Según los términos utilizados por Márcia Berbel (2005: 402).

¹⁶ Pimenta (2006-b: 363).

¹⁷ Véase también Berbel (2005).

españoles se negaron —tanto en la primera como en la segunda experiencia constitucional— a negociar con los americanos un estatuto de autonomía para sus provincias. Los diputados liberales portugueses hicieron lo propio al rechazar —entre otras— la propuesta de los diputados americanos de mantener la condición de reino para Brasil con la permanencia de Pedro como príncipe regente con sede en Río de Janeiro, según lo estipuló su padre João VI antes de embarcarse hacia Lisboa en abril de 1821. Tal negativa y las tensiones generadas a ambos lados del Atlántico continuaron con un decreto de convocatoria a Cortes en Brasil promulgado por el príncipe Pedro en junio de 1822 y culminaron con la independencia en septiembre, la cual se formalizó con un proyecto de imperio con sede en Río de Janeiro.¹⁸

Sin duda que el linaje de los Braganza dotaba al príncipe de una legitimidad y, por lo tanto, de una gran capacidad de manioobra para consumir tal gesto. Pero cabe destacar que la proclamación de Pedro como emperador en octubre de 1822 —y por lo tanto, la instauración del Imperio de Brasil— precedieron a la creación de la monarquía constitucional como forma de régimen para la nueva unidad soberana. La asamblea constituyente comenzó a sesionar en 1823 y seis meses después fue clausurada por el mismo emperador, quien otorgó la Carta Constitucional de 1824. Dicha carta, según el estudio de Andrea Slemian, era muy próxima al proyecto elaborado por la Asamblea de 1823 y al espíritu de las monarquías restauradas en Europa, aunque —como señala la misma autora— si bien se le transfería al emperador un papel clave en el ordenamiento político, éste no acumulaba tantos poderes como los atribuidos al Ejecutivo encarrado por la figura del monarca en la Carta francesa de 1814.¹⁹

Cabe preguntarse, entonces, por las razones que condujeron a proclamar un imperio en Brasil, más allá de reconocer las ambigüedades que el binomio imperio-monarquía mantuvo a lo largo de la historia.²⁰ A diferencia de Iurbide en México, cuyo título de emperador revelaba —entre otras razones— la ausencia de linaje para ser considerado un “rey” de pleno derecho, la expe-

¹⁸ Por cierto que en este ensayo estamos simplificando al máximo los complicados acontecimientos y posicionamientos discutidos y asumidos en las Cortes portuguesas y españolas respectivamente, analizadas en profundidad en la bibliografía citada y en tantas otras obras que, como dijimos, no hemos podido citar aquí. Nuestra intención es, como podrá fácilmente advertir el lector, esbozar ciertos argumentos en pos de dejar planteadas algunas comparaciones en torno a ciertas cuestiones problemáticas.

¹⁹ Slemian (2009a).

²⁰ Annino (2008).

riencia brasileña parece exhibir un intento sui géneris de constitucionalizar un imperio para crear una nación bajo el régimen de monarquía constitucional en cuya cúspide se ubicaba el monarca-emperador, legítimo heredero de la casa de Braganza. En el tablero político lusitano, la jugada de Brasil parecía redoblar la apuesta frente a la negativa de las Cortes de Lisboa de reconocer su condición de reino obtenida en 1815. La transformación de reino en imperio pudo consumarse con el apoyo de varias provincias, aunque como veremos luego “la unidad en las regiones que habían salido de la colonización portuguesa, prevista en la propuesta imperial, estaba lejos de ser asegurada”²¹.

Ahora bien, aun cuando quedan abiertos muchos interrogantes en torno a las cuestiones recién señaladas, lo cierto es que el rumbo constitucional adoptado por Brasil difiere del hispanoamericano, más tortuoso. Los ensayos incluidos en este volumen nos eximen de un análisis detallado sobre las diversas rutas y vicisitudes ocurridas en la historia del primer constitucionalismo en el orbe hispánico²². No obstante es oportuno destacar algunas cuestiones. En primer lugar, ya hemos señalado que la experiencia gaditana fue un intento de constitucionalizar el imperio creando una nación biocéntrica. Manuel Chust muestra muy bien en su ensayo aquí incluido que la Constitución de 1812 le arrebató a la Corona su soberanía para instalarla en la categoría de “nación española” y que, de esta manera, constitucionalizó el estado del Antiguo Régimen de la mayor parte de la monarquía borbónica, tanto metropolitana como colonial. A su vez, muestra también los acalorados debates desplegados dentro de las Cortes reunidas entre 1810 y 1812 sobre “el número de soberanías que ese nuevo Estado-nación estaba dispuesto a admitir”.

Como sabemos, éste es un punto crucial para entender el derrotero del primer constitucionalismo hispánico. Por un lado, porque la revolución constitucional que se expresó en la Carta gaditana se realizó—según la expresión de Porullo Valdés—“contra” el “fideicomiso” de la soberanía provocado por la crisis monárquica. La “revolución de nación”—y el nuevo sujeto político que surgió de ella—estuvo dirigida no sólo a crear un gobierno limitado y contener así el poder absoluto del monarca, sino también para contener el poder adquirido por los cuerpos territoriales expresado en los movimientos juntaístas, tanto peninsulares como americanos, desatados en 1808²³. Como

²¹ Slennian (2009-b: 101).

²² Véanse además Chust (1999), Chust/Frasquet (2004), Garriga/Lorente Sariñena (2007), Garriga (2010), Lorente Sariñena (2010).

²³ Porullo Valdés (2000; 2006).

ha demostrado el mismo autor, esa revolución de nación de dos hemisferios exhibió sus mayores dificultades para imponerse en América—aunque también en la Península—al no articularse a las demandas de autogobierno de los cuerpos territoriales, acostumbrados a manejarse con fuertes dosis de autonomía, más allá de los intentos borbónicos de reducirlas a través de sus reformas dieciochescas.

Así, la Constitución de Cádiz, aun cuando intentó conciliar la demanda de autogobierno al otorgar un estatuto electivo a las diputaciones provinciales y ayuntamientos, no logró frenar la tendencia federativa que, de hecho, se había desplegado en la primera fase de la crisis. Lejos de resolverla, la Carta de 1812 dejó al desnudo los dilemas derivados de esa nueva nación que escondía mal su vocación imperial. Una vocación que volvió a ponerse en evidencia en el Trienio Liberal y que culminó—tal como analiza aquí Ivana Frasquet—con la definitiva independencia de México²⁴.

En este punto es oportuno poner en diálogo, nuevamente, los casos lusitano e hispánico. En primer lugar, para trazar un arco entre la crisis de 1807-1808 y el trienio de los años 20 respecto de una alternativa que no llegó a concretarse pero que se discutió en ambas coyunturas: la de reconstruir una “unidad ibérica”. Esta posibilidad fue aventada por algunos sectores de la corte braganhina instalada en Río de Janeiro luego de las abdicaciones de Bayona. El proyecto de instalar una regencia encarnada por la infanta Carlota Joaquina de Borbón—esposa de João VI de Portugal y hermana mayor de Fernando VII—o por del infante D. Pedro Carlos de Borbón y de Beira (hijo del hermano de Carlos IV, Gabriel, y de la princesa de Beira, Mariana Victoria) y de unir así las dos Coronas ibéricas fue, en aquel momento, una alternativa más entre otras que buscaba salvar el “legitimismo monárquico” en medio de la tormenta provocada por el avance napoleónico²⁵. La unidad ibérica del trienio, en cambio, fue promovida por los sectores liberales en los momentos en que no se sabía qué actitud habría de adoptar João VI frente a las Cortes y a la Constitución que éstas se disponían a sancionar en Portugal²⁶. Si tal actitud se definía por el rechazo a regresar y a aceptar la centralidad de la nueva soberanía nacional con sede en Lisboa, los liberales estaban dispuestos a sacrificar la unidad del imperio y a concertar una unión liberal con España; es decir, una unión de las dos monarquías ibéricas, pero ahora constitucionalizadas.

²⁴ Véase también Frasquet (2008).

²⁵ Ternavasio (en prensa).

²⁶ Berbel (2005: 403).

La segunda cuestión que queremos dejar trazada es que si bien ambas metrópolis no fueron capaces de salvar sus imperios bioceánicos al negarse a reconocer a los americanos el estatus de sujetos políticos con derecho al autogobierno pleno dentro de las nuevas naciones—portuguesa y española—, la herencia que en términos constitucionales legaron a sus ex colonias difieren. Tal diferencia no reside tanto en el pasado colonial ni en los procesos constituyentes llevados a cabo en la Península sino en la naturaleza de las crisis experimentadas a partir de 1808. Si regresamos a los problemas planteados al comienzo de este ensayo, queda en evidencia que la crisis portuguesa, aun con las agudas consecuencias que tuvo, evitó con el traslado de la familia real la devastadora crisis monárquica española que—derivada de las ilegítimas abdicaciones—implicó la inmediata federalización de la soberanía. Si, como dijimos, el Trienio Liberal unió los destinos de las dos metrópolis alrededor de un mismo constitucionalismo y de un mismo fracaso en pos de mantener sus posesiones americanas, la institucionalización de las nuevas naciones, ahora independientes, reveló problemas que en gran parte fueron hijos de las distintas respuestas dadas a la crisis desatada por la “cuestión napoleónica”.

LOS DILEMAS AMERICANOS

Resultaría redundante detenernos aquí en los sinuosos caminos constitucionales experimentados por las nuevas unidades soberanas nacidas de los procesos de emancipación americanos, a los que están abocados los ensayos que continúan a éste. Por tal razón, sólo queremos dejar planteadas, para cerrar esta reflexión, algunas cuestiones cruciales de ese primer constitucionalismo iberoamericano. La primera está en sintonía con el argumento expuesto más arriba. La peculiar naturaleza que adoptó la crisis de la monarquía española desató dos procesos de independencia: uno de carácter *vertical* que gradualmente fue quebrando los lazos atlánticos con la metrópoli, y otro de carácter *horizontal*, que también de manera gradual—aunque con derroteros mucho más tortuosos—fue quebrando las estructuras territoriales americanas²⁷. Tales estructuras—que iban desde los pueblos más pequeños, pasando por ciudades y provincias hasta llegar a proyectadas naciones con contornos muy cambiantes—reclamaron derechos soberanos en diferentes dosis y formatos. Dichos reclamos derivaron muchas veces en guerras, pero también en

²⁷ Annino (2010).

iniciativas constitucionales. Los autores de este volumen analizan en profundidad estas últimas iniciativas y revelan el dilema compartido en todas ellas en torno a cómo definir el nuevo sujeto de imputación de la soberanía y, derivado de éste, cómo organizar política y territorialmente a esos nuevos sujetos. El primer problema estuvo íntimamente ligado al “enigma” del poder constituyente—según la gráfica expresión utilizada por Noemí Goldman para titular su ensayo—y el segundo, a las disputas en torno a tendencias centralistas, unitarias, federales o confederales.

Detengámonos por un momento en el primero de estos problemas. ¿Por qué el poder constituyente era un enigma? Elías Palti, al analizar algunos de los problemas que debieron enfrentar los diputados de las Cortes de Cádiz, destaca que entre ellos hubo uno “que no se deja nombrar, que aparece simplemente como imposible de definir” y que se trata, precisamente, de “la idea de un *poder constituyente*”²⁸. El autor sostiene que esta laguna conceptual no se debía solamente a la persistencia de imaginarios tradicionales, sino a las paradojas que encerraba la novedosa premisa de que existía ahora un actor instituyente que no reconocía ninguna legalidad preexistente, sino que actuaba a través de un congreso que hablaba en nombre de una voluntad nacional que decía representar pero a la cual el mismo congreso le tocaba instituir. Tales paradojas, que aquellas Cortes no pudieron despejar, se hicieron más acuciantes en los procesos constituyentes hispanoamericanos, porque al enigma de aquello que parecía imposible de definir se sumó el enigma sobre qué era lo que se debía representar. Aun cuando el nuevo sujeto de la “nación” gaditana fue objeto de duras controversias y resistencias—comenzando por los propios cuerpos territoriales de la Península—, los cuerpos con vocación soberana del Nuevo Mundo hicieron todavía más problemático el reconocimiento de esa invención llamada “poder constituyente”.

Y he aquí un punto fundamental para entender el derrotero que intentamos trazar en este volumen: como se ha repetido muchas veces en la historiografía reciente, el no reconocimiento que, en distintas regiones y momentos, expresaron los cuerpos territoriales hispanos respecto de las “naciones” que intentaban constituirse, derivaban del irresuelto problema de la soberanía nacido de la crisis monárquica²⁹. Así, pues, el poder constituyente se convirtió en un escenario de disputa y a la vez en un enigma en la medida en que no se acordaba en torno a “qué sujeto” de soberanía estaba imputado. La

²⁸ Palti (2007: 92).

²⁹ Annino (1994), Chiaromonte (2004).

consecuencia fue la paradoja de crear poderes constituyentes que se negaban a sí mismos al delegar muchas veces las soberanas decisiones de los congresos al “reconocimiento” de los cuerpos territoriales allí representados. En este nuevo contexto, la cuestión del “reconocimiento” fue crucial porque definía la legitimidad, trazándose así una frontera entre “antigua Constitución” y constitucionalismo moderno. Dicha frontera se hizo aún más visible en las experiencias hispanoamericanas que volcaron el nuevo idioma constitucional en molde republicano; un molde que, por otro lado, no contribuía a resolver los dilemas nacidos de los nuevos poderes constituyentes.

Tales dilemas, aunque no estuvieron ausentes en los debates suscitados en Brasil, encontraron una vía capaz de canalizarlos. La legitimidad del príncipe convertido en emperador fue por cierto crucial en este sentido, pues se anclaba, por un lado, en las pautas tradicionales de la monarquía y, por el otro, en la capacidad de inscribir al imperio en el nuevo idioma constitucional. En este caso, la cuestión del “reconocimiento” estuvo presente, pero con valencias diferentes. Mientras que en el orbe hispánico la noción de pacto constitucional se disputó en gran medida entre el preexistente “derecho de los pueblos” y el de una “nación indivisible” que se sustituía con el poder constituyente, en Brasil el binomio se dirimió entre una posición que privilegiaba a los representantes de la asamblea constituyente en la elaboración del nuevo pacto y otra que reconocía la autoridad del emperador por haber sido admitida de antemano por la “nación”³⁰. Si bien en este último caso se discutió también sobre la posibilidad de que las provincias tuvieran el derecho de negarse al pacto constitucional que se pretendía crear—encontrando esta posición defensores y detractores—el desenlace de los acontecimientos—que culminaron con la constitución *otroyé* en marzo de 1824—clausuró tales dilemas.

Esta clausura, sin embargo, no debe ocultar el segundo problema señalado previamente en torno a cómo organizar territorialmente los nuevos sujetos de soberanía. Si la segunda independencia de naturaleza horizontal a la que hicimos referencia para el orbe hispánico mostró las serias dificultades que experimentaron las élites criollas—y también peninsulares—para constituirse y definir las atribuciones de los cuerpos territoriales en regímenes más o menos centralistas, federales o confederales, la temprana y más duradera “unidad” del Imperio brasileño no dejó de sufrir embates significativos por parte de diversas regiones y provincias. La reacción de Pernambuco en 1824 creando la “Confederación de Ecuador”, aunque rápidamente reprimida por las

³⁰ Sleiman (2009a: 94).

fuerzas imperiales, es sólo una muestra de ello. El Imperio de Brasil enfrentó, pues, diversas manifestaciones separatistas que, como afirma Mária Berbel, “consiguieron contenerlas por medio del ‘arte de la política’ y, también, por la fuerza de las armas”³¹.

Ahora bien, en función de todo lo dicho, es preciso concluir con una reflexión que reubique las jerarquías conceptuales de los problemas aquí tratados. Trazar una historia del primer constitucionalismo iberoamericano implica distinguir, en principio, los puntos de partida de las dos áreas involucradas. En nuestra hipótesis, en el mundo hispánico es preciso privilegiar más la crisis constitucional de la monarquía que la crisis del orden imperial, porque sólo a partir de la primera es posible advertir un fenómeno que la perspectiva imperial no permite detectar en toda su dimensión: esto es, la existencia de los dos procesos de independencia ya señalados y el impacto que el segundo—consistente en la emancipación de los territorios frente a los antiguos centros de poder colonial—tuvo en los procesos constituyentes. En el área lusitana, en cambio, la noción de crisis imperial se ajusta mejor, no sólo porque allí no hubo una crisis constitucional de la monarquía sino porque ésta se emancipó a sí misma al trasladarse a un nuevo centro de poder, redefiniendo así nuevos equilibrios en la disputa inter-imperial y dentro mismo del imperio portugués.

Las consecuencias constitucionales de este punto de partida diverso ya han sido destacadas a lo largo de estas páginas. No obstante es oportuno señalar que, más allá de adoptarse el modelo republicano o el monárquico-imperial en cada una de las áreas aquí trabajadas, el binomio nación—Constitución encontró en Iberoamérica un escenario formidable de experimentación, tal como ponen en evidencia los siguientes ensayos.

BIBLIOGRAFÍA

- ADELMAN, Jeremy (2007): *Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- (2008): “An age of Imperial Revolutions”, en *American Historical Review*, n.º 2, vol. 13.
- ANNINO, Antonio (1994): “Soberanías en Lucha”, en Annino, A.; Castro Leiva, L.; Guerra, F. (eds.): *De los Imperios a las Naciones. Iberoamérica*. Zaragoza: IberCaja.

³¹ Berbel (2005: 423).

- (1995): "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821", en Annino, A. (coord.): *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- (2008): "Imperio, constitución y diversidad en la América hispana", en *Historia Mexicana*, LVIII: 1.
- (coord.) (2010): *La revolución novohispana, 1808-1821*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BERBEL, Márcia (1999): *A Nação como Arégrafo. Deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas 1821-1822*. São Paulo: Hucitec.
- (2005): "Nación portuguesa, Reino de Brasil y autonomía provincial", en Rodríguez O., J. (coord.): *Revolución, independencia y las nuevas naciones de América*. Madrid: Mapfre.
- CHARAMONTE, José Carlos (2004): *Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias*. Buenos Aires: Sudamericana.
- CHUST, Manuel (1999): *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz*. Valencia/México: Fundación Instituto Historia Social/Universidad Nacional Autónoma de México.
- CHUST, Manuel y FRASQUET, Ivana (2004): *La ascendencia del liberalismo decimoniano en España y América*. Valencia: Generalitat Valenciana.
- GRUZ-VILAVÓN, Pedro (2007): "Una nota sobre bayona en perspectiva comparada", ponencia presentada en el Seminario sobre la Constitución de Bayona, Departamento de Derecho Político de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
- FRASQUET, Ivana (2008): *Las ansias del águila. Del liberalismo galitano a la república federal mexicana*. Castellón: Universitat Jaume I.
- GARRIGA, Carlos y LORENTE SARIÑENA, Marta (2007): *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- GARRIGA, Carlos (dir.) (2010): *Historia y constitución: trayectos del constitucionalismo hispano*. México: Centro de Investigación y de Docencia Económica.
- GODECHOT, Jaques (1969): *Europa y América en la época napoleónica (1800-1815)*. Barcelona: Labor.
- HOCQUELLET, Richard (2011): *La revolución, la política moderna y el individuo. Miradas sobre el proceso revolucionario en España (1808-1835)*. Cádiz: Universidad de Cádiz.
- LORENTE SARIÑENA, Marta (2010): *La Nación y las Españas: Representación y territorio en el constitucionalismo galitano*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- MAKTURÉ, Eduardo (2008): "La importancia institucional de la Constitución de Bayona en el constitucionalismo hispanoamericano", en *Historia Constitucional (revista electrónica)*, n.º 9, <<http://hc.rcdhis.es/09/articulos/pdf/08.pdf>>.
- MOLINER PRADA, Antonio (2007): "El movimiento juntero en la España de 1808", en Chust, M. (coord.): *1808. La eclosión juntera en el mundo hispano*. México: Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México.
- PALTA, Elías (2007): *El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- PIMENTA, João Paulo (2006): *Estado e Nação no fim dos impérios ibéricos-no Paísa (1808-1828)*. São Paulo: Editora Hucitec.
- (2006): "Brasil y las revoluciones de Hispanoamérica", en Calderón, M. T. y Thibaud, C. (coords.): *Las revoluciones en el mundo Atlántico*. Bogotá: Taurus.
- PORTILLO VALDÉS, José María (2000): *Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- (2006): *Crisis Atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana*. Madrid: Marcial Pons.
- RAMOS, Rui (2008): "La 'revolución' de 1808 y los orígenes del liberalismo en Portugal: una reinterpretación", en Ávila, A. y Pérez Herrero, P. (comps.): *Las experiencias de 1808 en Iberoamérica*. Alcalá de Henares/México: Universidad de Alcalá/Universidad Autónoma de México.
- ROMANELLI, Raffaele (2010): "Gli imperi nell'età degli statuti", en Romanelli, R. (coord.): *Impero, Imperi. Una conversazione*. Roma: L'ancora.
- SARTORI, Giovanni (1992): *Elementos de Teoría Política*. Buenos Aires: Alianza.
- SLEMIAN, Andréa y PIMENTA, João Paulo (2008): *A corte e o mundo. Uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil*. São Paulo: Palamedia.
- SLEMIAN, Andréa (2009): *Sob o império das Leis. Constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834)*. São Paulo: Editora Hucitec.
- (2009): "Instituciones, legitimidad y [des]orden: crisis de la Monarquía portuguesa y construcción del Imperio de Brasil (1808-1841)", en Frasquet, I. y Sleimian, A. (eds): *De las independencias iberoamericanas a los Estados nacionales (1810-1850). 200 años de historia*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert/AHILA.
- TERNAVASIO, Marcela (en prensa): "Una princesa para América: la alternativa carlista frente a la crisis monárquica de 1808", en Landavazo, M. y Guzmán Pérez, M. (coords): *Guerra, política y cultura: las independencias hispanoamericanas*. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

- CHUST, Manuel (1999): *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz*. Valencia/México: Fundación Historia Social/Universidad Nacional Autónoma de México. Biblioteca Historia Social.
- Diario de Sesiones de Cortes*.
- RODRÍGUEZ O., Jaime (2008): "Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1824", en *íd.* (coord.): *Las nuevas naciones, España y México, 1750-1850*. Madrid: Mapfre.
- ZIPPELIUS, Reinhold (1998): *Teoría General del Estado*. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Porrúa.

ORÍGENES DEL PRIMER CONSTITUCIONALISMO MEXICANO, 1810-1824

Ivana Frasquet
Universitat de València

BREVE BALANCE HISTORIOGRÁFICO

Los procesos de independencia que se produjeron a principios del siglo XIX en toda la geografía americana de la monarquía hispánica han centrado el interés de los estudios históricos de las últimas décadas; más, si cabe, en la coyuntura bicentennial en la que nos encontramos en estos momentos. Los temas abordados desde la Historia han sido múltiples y variados. Por ejemplo, inicialmente, desde las interpretaciones más clásicas centradas en las figuras heroicas y en una versión tradicional nacionalista, se estudió fundamentalmente el movimiento insurgente y a sus dirigentes¹. Sin embargo, nuevas investigaciones se han preocupado, desde la década de los ochenta, de contextualizar la independencia en un proceso más amplio de dimensiones ultramarinas, incluyendo así la crisis de la monarquía hispánica como punto de inflexión en el desmoronamiento del imperio español en América². En

¹ Por cuestiones de espacio la bibliografía ha sido reducida a lo mínimo posible. Sin ánimo de exhaustividad, De la Torre (1964), Lemoine (1965), Hannill (1966), Timmons (1963).

² De forma muy general podemos citar a Benson (1955), Anna (1978), Hammett (1978), Rodríguez (1992), Guerra (1992), Annino (1995).

general, a partir de esta interpretación, las cuestiones políticas han atraído el mayor interés—en los últimos tiempos—dentro los temas de estudio de la independencia mexicana, centrándose sobre todo, en las formas de representación, los procesos electorales, la formación de las juntas, la participación de los diputados en las Cortes, las concepciones acerca de la soberanía, el federalismo, la república, el liberalismo, etc. Pero también otros puntos de vista distintos al político como son: la contextualización de la guerra y las fuerzas armadas como elementos fundamentales para comprender todo el proceso, la participación de las comunidades indígenas, las perspectivas regionales, las cuestiones económicas y fiscales, el ámbito cultural y social, han sido abordados aportando interpretaciones complementarias y necesarias para el estudio de la independencia mexicana.

A pesar de esta fructífera producción historiográfica, pocos han sido los investigadores que, desde la Historia, se han acercado de forma específica a las cuestiones relativas al primer constitucionalismo mexicano. En parte, porque la propia disciplina obliga a visiones y planteamientos más amplios y contextualizados; y, en parte, porque esta temática ha sido tradicionalmente coto de los especialistas en Derecho y cuestiones jurídicas, lo que derivó el foco de interés de los historiadores hacia otros temas.³ Con todo, estos trabajos se centraron en cuestiones de ordenamiento jurídico y funcionamiento legislativo, enmarcadas, cuando mucho, en una interpretación tradicional de la independencia mexicana, de corte nacionalista y, en ocasiones, conservador. Pocos han sido, pues, los trabajos que han abordado las cuestiones políticas desde la óptica del primer constitucionalismo mexicano con la intención de abarcar más allá de la descripción de las normas y contextualizar éste en el complejo proceso que llevó a la independencia. No pretendemos, en este breve ensayo, abordar este reto. Pero sí acercar los caminos que entre historiadores y juristas se han recorrido hasta la fecha, contextualizando históricamente los inicios del constitucionalismo mexicano en el período inicial de la independencia. Para ello, pretendemos comprender algunos de los mecanismos de formación de una primera cultura política mexicana constitucional, a partir del abordaje de tres ejes fundamentales como fueron la soberanía, la representación y el territorio. En este sentido, indagaremos en los inicios de una cultura política mexicana comprendida dentro de la formación del constitucionalismo gaditano común a toda la monarquía española para después

deseñar la urdimbre que permitió el paso hacia una cultura republicana y federal. El primer federalismo mexicano se configuró sobre la base de la autonomía y el autogobierno de los poderes provinciales establecidos en la Constitución de 1812 y sólo después de la abolición de esta Constitución fue posible pensar en la república. Es decir, el Estado-nación mexicano en 1824 fue federal porque era gaditano y republicano porque era federal.

LOS INICIOS: EL DOCEAÑISMO

Constitucionalismo, soberanía, representación y territorio. Cuatro dimensiones piramidales de la crisis de la monarquía hispánica a principios del siglo XIX. Cuatro lados que revisten distintas soluciones e interpretaciones de un proceso histórico que desembocó—en los territorios americanos de las monarquías ibéricas—en la independencia y la formación de Estados-naciones. Cuatro elementos que se imbrican y retuercen para entretener lo que fue finalmente, en este caso, el Estado-nación mexicano. Cada uno de ellos incluye al siguiente y todos confluyen en el establecimiento del primer constitucionalismo como necesidad última de ser, en un momento de coyuntura crítica, de transformación, de cambio, pero también de continuidad y de tradición. Cada uno de ellos representará también para los distintos sectores sociales diferentes concepciones ideológicas, diferentes proyectos políticos y anhelos de sus variados intereses económicos. Éstos se irán manifestando a lo largo de todo este proceso histórico, englobando distintas fases, coyunturas y conformaciones que en modo alguno fueron estáticas ni tuvieron compartimientos estancos, sino todo lo contrario. Las propuestas se modificaron y aumentaron en y durante el propio proceso en forma activa y reactiva indistintamente. Durante las primeras dos décadas del siglo XIX, las idas y venidas, los éxitos y derrotas, los distintos ensayos políticos desembocarán en México en la Constitución federal de 1824. Desentrañar la madeja que se tejió para llegar a este resultado implica un ejercicio de descomposición de distintos elementos clave—en este caso la soberanía, la representación política y el territorio—que vertebraron las principales propuestas constitucionales de la época. Y al mismo tiempo la recomposición de los mismos en un contexto histórico de crisis, guerra e independencia, para conseguir analizar los puntos de conexión entre unos y otros. Para el caso mexicano habrá que tener en cuenta no sólo los textos acabados y aplicados, sino también las propuestas que a lo largo de estos años se plantearon para conformar un Estado mexica-

³ Desde distintas interpretaciones pueden consultarse las obras de Rabasa (1986), Sierra Brabata (1983), Moreno (1972), Tena Ramírez (1973), Barragán (1978).

no independiente y soberano. Éstas serían los Elementos constitucionales de Rayón, la llamada Constitución de Aparzingán de Morelos, la Constitución de 1812, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba, el Acta constitutiva federal y, finalmente, la Constitución de 1824. Aunque no todos serán analizados con el mismo grado de profundidad por razones de espacio, se persigue su significación en los momentos más importantes de la conformación del Estado-nación mexicano.

La crisis monárquica iniciada con los acontecimientos conocidos de 1808 tuvo enormes efectos en América. El terremoto juntero que se desencadenó en la Península a raíz de la ocupación napoleónica afectó también a Nueva España donde, a pesar de que no se consumió la reunión de una junta en la ciudad capital, hubo intentos por establecer este tipo de instituciones que asumieran la soberanía en nombre de Fernando VII hasta la resolución de la crisis⁴. La asunción de la soberanía por parte de estas juntas supuso ya una quiebra de los postulados políticos e ideológicos vigentes hasta entonces en la monarquía hispánica. Si bien es cierto que muchos elementos tradicionales confluyeron en este movimiento, también lo es que supuso un punto sin retorno para las élites criollas del continente que avanzaron en distintas formas hacia el autogobierno y la independencia. Es más, los territorios asumieron una autonomía que ya no estuvieron dispuestos a abandonar⁵. Para el caso novohispano, el estallido de la guerra a partir de 1810 va a mantener algunas regiones bajo el control insurgente donde se ensayarán, como veremos, formas de juntas y gobiernos alternos a los que se desarrollaban en la Península.

Iniciada la guerra insurgente en Nueva España y tras dos años de conflicto en la Península contra los franceses, en septiembre de 1810 se reunieron por primera vez las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía española. Los inicios de este Congreso, su proceso de convocatoria, la elección de sus diputados y los debates que se produjeron entre ellos han sido —y siguen siendo— objeto de fructíferas investigaciones⁶. Las Cortes no se convocaron como constituyentes porque inicialmente no pretendían elaborar una nueva Constitución para la monarquía, sino —como insistían algunos de sus miembros—

⁴ Guedea (2007). Para la Península pueden consultarse los trabajos de Hocquelliet (2008) y Moliner (1997).

⁵ Antonio Amiano ha calificado este movimiento como la primera revolución federal de los cuerpos intermedios de la monarquía, que más tarde, confluiría con la revolución gaditana. Véase Amiano (1995: 186).

⁶ Porrallo Valdés (2000), Garriga y Lorente (2007), Suárez (1982), Claust (1999).

hros— adaptar las antiguas leyes a los nuevos tiempos. La reconstrucción histórica del pasado de la monarquía española presente en la mayoría del pensamiento tardilustrado español fue una necesidad, como ha indicado Carmen García Moneris, de *pensarse históricamente* para poder, posteriormente, *pensarse políticamente*. Es decir, los distintos proyectos políticos viables en el momento de construcción de los nuevos sujetos históricos, las naciones, conllevaban también diferentes concepciones y lecturas de la historia. Si bien es cierto que estos elementos historicistas estuvieron presentes en la conformación de este primer constitucionalismo hispánico, también lo es que el resultado de incorporar los planteamientos *institutionalistas*, *individualistas* y *liberales* conllevó una revolución de dimensiones todavía incommensurables⁷.

La Constitución de 1812 fue la obra que culminó esa conjunción revolucionaria al sancionar en su artículo tercero la soberanía nacional. La radical concepción de la soberanía que algunos diputados plantearon revestía varias caras, entre las que se encontraban también la nación y la representación. En primer lugar, y como denunciaron los diputados más reaccionarios, la soberanía le estaba siendo arrebatada al, hasta entonces, único titular de la misma: el monarca. Es más, residía en la nación, el nuevo sujeto político que se constituía y que, a su vez, era definida como la “reunión de los españoles de ambos hemisferios”. En esta concepción revolucionaria de la nación, la soberanía residía en todos y cada uno de los españoles, que por no poder ejercerla individualmente, la depositaban en un cuerpo representativo, esto es, las Cortes. La nación aquí iba, por tanto, ligada al concepto de soberanía y de representación política, como veremos. De ahí que la concepción de la nación que aparece ya en el artículo 1º de la Constitución gaditana se entendía como la reunión de todos los que formaban parte de la sociedad y no como un ente cultural y superior a ella. Es decir, la nación soberana no podía entenderse como la unión de los territorios o los reinos que la conformaban ni definirse por los derechos o autonomía que el monarca hubiera concedido a estos reinos, sino por los individuos reunidos libremente en sociedad. Por ello, la nación era anterior y superior al monarca. Y por ello también la alusión al concepto re-unión, es decir, una nueva unión, diferente a la anterior.

En el debate de este artículo 1º, algunos diputados se adelantaron en la significación teórica de los conceptos. Fue Antonio Llamas quien introdujo la definición de los principales elementos del artículo: nación y soberanía. Consideraba que la nación era la unión del pueblo español con su monarca y

⁷ García Moneris (2003: 49).

que la soberanía podía ser compartida entre ambos pero apuntaba una superioridad de la interpretación nacional de la soberanía sobre la real. Así, Llamas manifestaba en la Cámara que “La soberanía real y verdadera solo la admito en la Nación”. Era la apuesta del liberalismo que se movía entre “el gobierno despótico”—la soberanía del rey—y el “democrático”—del pueblo—. Entramos aquí en el terreno de la mistificación liberal, pero también en la apuesta decidida del liberalismo por un Estado constitucional, equidistante entre el monarca y el pueblo, entre el absolutismo y la democracia.

Pero fue un diputado novohispano quien intervino, no para cuestionar los planteamientos políticos sobre el Estado y la nación, sino la concepción unitaria que se estaba trasladando de esa nación. José Miguel Guridi y Alcocer, diputado por la provincia novohispana de Tlaxcala, expresó, ante la sorpresa de los peninsulares y algunos americanos, el desagrado que le causaba la palabra *española* como definición de la nación: “pues no parece lo más claro y exacto explicar la Nación española con los españoles, pudiéndose usar de otra voz que signifique lo mismo”⁸. ¿A qué nación se refería entonces? Si no era a la española, ¿era a la americana como plantearía posteriormente Rayón en sus *Elementos constitucionales*? ¿a la hispana, tal vez, que se conformaría con las dos partes de la monarquía, la europea y la americana? Sin duda fue trascendental que en este primer día de discusiones constitucionales ya se planteara otra denominación de nacionalidad alternativa a la hegemónica hasta entonces: la española. Y fue un novohispano quien lo hizo. Este diputado conocía perfectamente que la definición de nación, tal y como la presentaba la comisión, suponía la aceptación de una sola nacionalidad, la española, dejando fuera de ella la pluralidad nacional que podían representar los pueblos americanos. Es más, a lo largo de los debates, numerosos diputados mistificarán la nomenclatura de nación, refiriéndose tanto al ente cultural como a la formación política. Guridi no jugó con esta ambigüedad: “Tomando, pues, físicamente á la Nación española, no es otra cosa que la colección de los nacidos y oriundos de la Península, la cual se llama España. Pero aun tomando políticamente la Nación española por el Estado, no hallo exacta su definición”⁹. Es decir, la Península era la que albergaba a la “nación española”, por lo tanto, América debía albergar otra nacionalidad distinta. Guridi y Alcocer lo explicó desde la concepción unitaria del Estado que, a su vez, identificaba con Gobierno. Esto es, confundía conscientemente, mix-

tificaba, el Estado y el gobierno. Así, la unión consistía en el gobierno, no era necesario que también existiera en la nación, o en las distintas nacionalidades que pudieran existir. Es decir, Guridi y Alcocer no cuestionaba que los territorios de la monarquía, tanto peninsulares como americanos, compartieran una misma forma de Estado, o de gobierno, según él. Lo que cuestionaba era que a un solo Estado le correspondiera una única nación¹⁰. Pero lo más importante y según la definición de soberanía que se incluía en el artículo tercero, es que al proponer distintas naciones, ¿no estaba proponiendo también distintas soberanías? Concepción multisoberana que encontraba sus contradicciones y dificultades en la definición que la mayor parte de los liberales peninsulares tenían de la misma, pues quedaba claro que la soberanía era única, indivisible y no enajenable. Y además el concepto soberanía en este sentido iba unido al de nacional. Así, como venimos insistiendo, a la nación sólo le cabía una única soberanía.

Por ello, el planteamiento del novohispano derivaba hacia posturas cercanas al federalismo. Es decir, ¿a distintas soberanías no correspondería también la creación de un Estado-nación federado que englobara todos los territorios de la monarquía? Serán los diputados peninsulares liberales los que verán en estos planteamientos de los novohispanos el “peligro” del federalismo e intentarán rebatirlo argumentando que, a pesar de la diferencia de etnias, razas, gobiernos y territorios, la nación era una sola, tal y como se establecía en la Constitución. Sobre todo porque la concepción monárquica del Estado impedía la disgregación soberana en otras entidades. Lo contrario remitía a experiencias radicales no monárquicas y democráticas, es decir, por ejemplo, a la república francesa jacobina. La fracción liberal peninsular se escoraba así hacia posturas centralistas presionada por los planteamientos federales de los americanos. Como vemos, el federalismo que se plasmará en la Constitución mexicana de 1824 ya estaba en las propuestas de los diputados novohispanos en 1811 y tendrá que superar la forma monárquica de gobierno para tener éxito.

Pero avancemos en la relación entre soberanía, representación y territorio. En la Constitución quedó claro que la representación política sería la

⁸ DSCG, 25 de agosto de 1811, p. 1688.

⁹ DSCG, 25 de agosto de 1811, pp. 1687-1688.

¹⁰ La definición de nación que el diputado novohispano proponía como alternativa fue la siguiente: “la colección de los vecinos de la península y demás territorios de la Monarquía unidos en un Gobierno, ó sujetos á una autoridad soberana”. Definición sutil y lo suficientemente ambigua para no traspasar a primera vista su intención. ¿No estaba planteando una nación hispana que incluyera varias nacionalidades, quizá americanas, junto a la española?

base para elegir al máximo órgano depositario de la soberanía: las Cortes. El sistema electoral se dividía en tres niveles que abarcaban las antiguas divisiones de parroquias, partidos y provincias. De esta forma, la participación electoral indirecta estaba garantizada a todos los miembros de la nación, aunque el derecho a ser elegido se reservaba a los ciudadanos. La creación de instituciones de gobierno local y provincial fue el punto de inflexión en los planteamientos americanos sobre el problema de organización del territorio de la monarquía. Los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales centraron la batalla por la soberanía del territorio. Esto es, la única manera de organizar administrativamente —y de forma federal— un territorio tan inmenso como el de la monarquía era dotando al territorio de capacidad soberana. Por ello los americanos exigieron la soberanía existente en estas instituciones conseguida mediante el proceso electivo. Es decir, si las Cortes eran soberanas porque así lo legitimaba la participación en las elecciones por parte de los titulares de esa misma soberanía, también los ayuntamientos y diputaciones lo eran, puesto que el proceso electoral para conformarlos era el mismo. Florencio Castillo, diputado por Costa Rica lo explicitaba en el salón de sesiones: “Si las Cortes representan á la Nación, los cabildos representan un pueblo determinado”¹¹.

La respuesta del liberalismo peninsular vino de la mano del conde de Toreno, quien aclaró que el planteamiento realizado por los americanos suponía abiertamente la realización de un estado federal:

El señor preopinante ha fundado todo su discurso en un principio á mi parecer equivocado, cuando ha manifestado que los ayuntamientos eran representantes de aquellos pueblos por quienes eran nombrados. Este es un error: en la Nación no hay más representación que la del Congreso nacional. Si fuera segun se ha dicho, tendríamos que los ayuntamientos, siendo una representación, y existiendo consiguientemente como cuerpos separados, *formarian una nation fedelada, en vez de constituir una sola é indivisible nation*¹².

¹¹ DSC, 13 de enero de 1812. También Guriñ y Alcocer había insistido en ello: “Yo tengo a los diputados provinciales como representantes del pueblo de su provincia, cuando hasta los regidores de los ayuntamientos se han visto como tales aun antes de ahora. Unos hombres que ha de elegir el pueblo, y cuyas facultades les han de venir del pueblo ó de las Cortes, que son la representación nacional, y no del Poder ejecutivo, son representantes del pueblo”. DSC, 10 de enero de 1812.

¹² DSC, 10 de enero de 1812.

La descentralización autonomista que los americanos reivindicaron tanto en el poder local, ayuntamientos, como desde el poder provincial, típicamente, suponía una asunción de la soberanía que no tenía que ser, necesariamente, nacional, sino que también podía extenderse al ámbito local y, especialmente, provincial. De esta forma podía coincidir ésta con el criterio de la igualdad de representación. Se apuntaban ya aquí los futuros planteamientos federales de los mexicanos en el Acta constitutiva de 1824. Pero para ello, habría que dividir la soberanía, y eso no era posible en el planteamiento gaditano.

La organización administrativa del territorio de la monarquía española suponía, a su vez, una cuestión de orden político y social, pues implicaba también un profundo cambio en el sistema de recaudación de rentas que pasaba a ser competencia de los nuevos órganos políticos locales y provinciales. Un planteamiento a tener en cuenta en el contexto de guerra que se vivía en esos momentos en la Península y también en Nueva España. Aceptar la propuesta de conformación de ayuntamientos y diputaciones suponía para algunos diputados “alterar el orden y sistema tradicional, no sólo de rentas, sino del gobierno de los pueblos”¹³.

LA ALTERNATIVA: LAS PROPUESTAS INSURGENTES

La insurgencia novohispana supuso, además de un levantamiento armado y la movilización de sectores populares del Bajío, la elaboración de propuestas teóricas que dibujaban un futuro Estado-nación mexicano. Entre ellas, destaca por su relevancia la formación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro establecida por Ignacio López Rayón en agosto de 1811, en un intento de coordinar un centro político para la insurgencia y con ella el primer texto de carácter constituyente para el México considerado independiente: los *Elementos constitucionales*. Es cierto que el propio Rayón indicaba que se trataba solamente de algunas ideas a tener en cuenta para elaborar la futura Constitución¹⁴, de ahí su carácter provisional y en revisión, pero

¹³ Como ha indicado magníficamente Encarna García Moneris, la construcción del Estado-nación pasaba también por los municipios y las provincias. García Moneris (2003: 88).

¹⁴ Indicaba Rayón en el preámbulo: “No es una legislación la que presentamos: ésta sólo es obra de la meditación profunda, de la quietud y de la paz; pero manifestar a los pueblos cuáles han sido los sentimientos y deseos de nuestros pueblos y cuáles sus solicita-

ya se pueden destacar algunos elementos comunes al constitucionalismo de la época: la división de poderes, la libertad de imprenta, el establecimiento del *habeas corpus*¹⁵, la abolición de los gremios, etc. A pesar de que en su artículo quinto se decía que “la soberanía dimana inmediatamente del pueblo”, seguidamente se hacía residir en Fernando VII y su ejercicio en un Supremo Consejo Nacional Americano. Es decir, a diferencia de otras juntas americanas y peninsulares que se habían arrogado el depósito de la soberanía en nombre del monarca, la de Rayón aludía a un tradicional pacto social entre el pueblo, de quien dimanaba el poder que luego residía en el monarca y era ejercido por el Consejo. El contexto de guerra en el que se elabora este documento es fundamental para comprender las directas alusiones a distintos sectores que necesitaban ser atraídos a la causa insurgente. De ahí la proscripción de la esclavitud en el artículo 24, o de la tortura en el 32, pero también el sostenimiento de la jerarquía eclesiástica y del tribunal de la Inquisición en los artículos 2 y 3. En cualquier caso, estos *Elementos constitucionales* no establecieron ninguna definición concreta sobre la nación o la conformación del territorio; es más: las breves alusiones a la nacionalidad y la ciudadanía hay que leerlas entre líneas y se referían, básicamente, a una concepción general, americana, de la misma, y nunca propiamente novohispana o mexicana.

De mayor trascendencia teórica aunque también sin aplicación de sus principios fue la llamada Constitución de Apatzingán, apadrinada por José María Morelos, en la que se sentaban las bases de un verdadero texto constitucional inspirado tanto en los *Elementos* de Rayón como en los *Sentimientos de la Nación* del propio Morelos. El *Derecho Constitucional para la libertad de la América mexicana* contenía 242 artículos promulgados el 22 de octubre de 1814 en los que se plasmaba un corpus teórico sobre el futuro Estado mexicano. Interesa sobre todo la definición de soberanía contenida en el artículo segundo: “la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad”. En cierta medida recuerda, sobre todo, la máxima contenida en la Constitución gaditana y que no pudo

des, es lo mismo que hacerlo con los principios de una Constitución que podrán modificarse por las circunstancias pero de ningún modo convertirse en otros”. *Elementos de la Constitución* por Ignacio López Rayón en *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana*. Vol. I, tomo I, Serie III, México: Miguel Porrúa (1997).

¹⁵ Algunos autores han destacado la influencia inglesa en los *Elementos* constitucionales por esta referencia. Soberanes Fernández (1992: 25).

ser aprobada en las Cortes dos años antes referida a la capacidad de elegir la forma de gobierno deseada. Y, seguidamente, otra concepción docetárista de la soberanía que por su naturaleza se fijaba como “imprescriptible, no enajenable e indivisible”. El modelo gaditano triunfaba también en la alternativa insurgente a la construcción del Estado-nación mexicano, pues esta concepción de la soberanía suponía, como hemos visto, un estado centralizado, donde los gobiernos locales y provinciales no podrían asumir capacidad soberana alguna. Y así lo explicitaba en su artículo 43: “estas provincias no podrán separarse unas de otras en su gobierno, ni menos enajenarse en todo o en parte”. La territorialidad expresada en la Carta gaditana se mantenía en las propuestas insurgentes explicitando una forma de gobierno unitaria que continuaría hasta 1823. Las intencencias habían dado lugar a las provincias, que de alguna manera preexistían territorialmente pero que se institucionalizaron con las diputaciones provinciales. El viejo orden colonial continuaba en las delimitaciones físicas de los territorios pero con resignificaciones políticas notablemente distintas¹⁶. Igualmente, el texto asume el mismo procedimiento electoral contenido en la Constitución gaditana en tres niveles, que, como hemos indicado, había servido a los americanos para plantear la forma de Estado federal de la monarquía por la representación política asignada a los gobiernos locales y provinciales. ¿Sería lo mismo para un México independiente? Sabemos que no. El Estado-nación no iba a ser federal, al menos de momento, pero ¿cuál sería su forma de gobierno? La monarquía quedaba descartada en el artículo cuatro por la conformación de un gobierno que no sería el interés particular de ninguna familia ni hombre, sino el resultado de la voluntad general de todos los ciudadanos. Ahora bien, la república no se mencionaba a lo largo de todo el artículo a pesar de que la ciudadanía se amplía considerablemente a todos los nacidos en la América novohispana y la soberanía residía originariamente en el pueblo, dejando su ejercicio a la representación nacional. Los presupuestos ideológicos de la Constitución de Apatzingán avanzaban posturas claras del liberalismo clásico como la descripción de los derechos fundamentales, la libertad de imprenta, la instrucción pública, la división de poderes, etc.¹⁷. Pero al mismo tiempo, y como había sucedido también en Cádiz, arrastraban elementos de una tradición

¹⁶ Marcello Carmagnani lo ha expresado de la siguiente manera: “La institucionalización de la territorialidad no fue entonces una simple reorganización de lo existente sino también una nueva conformación de la territorialidad” (Carmagnani 1994: 58).

¹⁷ De la Torre Villar (1978: 64 y ss.).

monárquica difícil de superar con celeridad. Una monarquía contra la que se luchaba militarmente pero cuyos referentes mentales seguían legitimando, ahora paradójicamente, un cambio de gobierno. Por ello, Morelos reservaba al poder legislativo el tratamiento de *Majestad*, que ya se habían arrogado las Cortes gaditanas en 1810 a propuesta de un americano y antes la Junta Central. Y con ello se refería, igualmente, a la preeminencia del legislativo por ejercer la soberanía.

Contradicciones que estaban en la base de la construcción del Estado-nación mexicano, idas y venidas en un contexto bélico que definía, al mismo tiempo, para los mexicanos lo que eran y lo que querían ser. Ese *pensarse políticamente* que sólo era posible en el fragor de la propia construcción nacional pero que no quedaría definido completamente casi hasta finales del siglo XIX.

LA INDEPENDENCIA: EL DOCEAÑISMO MEXICANO

Los postulados doceañistas contenidos en la Constitución y la legislación que emanó de las Cortes volvieron a plantearse durante la segunda etapa constitucional de la monarquía hispánica. En menos de seis años el constitucionalismo volvía a ser una opción viable en la construcción del Estado, primero monárquico hispánico —entre 1820 y 1821— y después mexicano —monárquico desde 1822 y republicano a partir de 1823—. La representación política, la soberanía y la organización territorial regresaban al centro del debate político de las Cortes en Madrid. Esta vez de la mano de un destacado diputado mexicano. Pablo de Lallave planteó nuevamente la cuestión de que las diputaciones provinciales eran soberanas y parte de la representación de la nación, y por lo tanto, compartían ese atributo del poder con las Cortes. Esto chocaba frontalmente con la concepción de la soberanía impuesta en Cádiz, que ya hemos dicho que residía en todos y cada uno de los individuos que conformaban el cuerpo social, esto es, la nación. Y como la nación no podía ejercer por sí misma esta soberanía, depositaba el ejercicio de la misma en un cuerpo representativo: las Cortes. De ahí, insistentemente, desde el inicio, representación y soberanía fueran dos partes de un mismo todo, donde la soberanía era indivisible, única y exclusivamente perteneciente a la nación y no a sus cuerpos representativos. Por eso, sólo una podía ser también esa nación.

Por todo ello, el planteamiento de unos cuerpos provinciales, las diputaciones, como representativos, venía a cuestionar que en el Estado existiera

una sola soberanía y por lo tanto, también una sola nación. Este problema se estableció como una pugna entre americanos y peninsulares mientras la pre-tensión fue construir un único Estado-nación, pero, ¿qué ocurriría a partir de la independencia de México? La cuestión se dilucidó en distintos niveles. Por un lado, la asunción de una forma de Estado monárquica a raíz del Plan de Iguala, el imperio, que se identificó desde los planteamientos gaditanos con el centralismo y la soberanía única. Por otro, la concepción autonomista de la soberanía provincial, trasladada a las diputaciones y que disputó con el Congreso la capacidad representativa y el depósito de la soberanía. Lo que, al mismo tiempo, estaría cuestionando la unidad de la nación; en este caso ya mexicana. Es decir, las propuestas federales de los americanos—novohispanos en las Cortes de Cádiz y de Madrid en 1810 y 1820 se trasladarán a la construcción del Estado mexicano a partir de 1821. O en otras palabras, la problemática no venía dada por las dimensiones del Estado que se intentaba construir, sino por la concepción de la soberanía y la territorialidad que se iba a adoptar.

La insistencia de los diputados novohispanos en estas Cortes de considerar cada intendencia como una verdadera provincia desvelaba la táctica política y de interpretación. De nuevo, la organización colonial del territorio se esgrimía como el vínculo entre una vieja territorialidad reconsiderada a la luz del contenido político que ostentaba el concepto de provincia en boca de los diputados. No era tanto el territorio, sino su órgano de gobierno y administración política en sentido amplio, la diputación, que a su vez se elegía mediante un complejo proceso electoral basado en la soberanía que poseían los que, como españoles, es decir, como nación, participaban en el mismo. El resultado de tan profundo debate fue el Decreto de 9 de mayo de 1821 que aumentaba considerablemente el número de diputaciones provinciales en México. Pero no fue suficiente, este y otros condicionantes lanzarán a los diputados a abandonar la vía autonomista sustentada desde 1810 y a centrarse en la consecución de estos logros en la esfera de un Estado únicamente mexicano.

Proclamada la independencia mexicana a finales de 1821 era el momento de materializar todos los planteamientos autonomistas que los diputados mexicanos habían exigido en las Cortes de la monarquía. Ahora las Cortes serían exclusivamente mexicanas, lo que, supuestamente, facilitaría la tarea. Pero las cosas no serían fáciles. La independencia se había fraguado desde la asunción de los Tratados de Córdoba y del Plan de Iguala, que ahora serían asumidos como bases fundamentales constitutivas del nuevo Estado-nación

mexicano. El problema era que estas bases remitián necesariamente a la forma monárquica de gobierno, convirtiéndolo a México en un imperio, manteniendo así la continuidad monárquica constitucional que desde Cádiz tenía el poder ejecutivo. De momento los Tratados reservaban el trono a Fernando VII y en su caso a otro miembro de su familia. Era el "pacto" que Iturbide había firmado con O'Donoghú y, por ahora, se mantenía.

La convocatoria de elecciones dio paso a la reunión de las primeras Cortes mexicanas el 24 de febrero de 1822. El primer acto del Congreso en la inauguración de sus sesiones fue declararse legítimamente instalado y afirmar que "la soberanía reside esencialmente en la nación mexicana"¹⁸. Así, doce años después de la declaración de soberanía en Cádiz, el Congreso, ahora exclusivamente mexicano, se declaraba depositario de la soberanía de la nación, en este caso de la mexicana. Faltaba por dilucidar quién o qué sería la nación y cómo se organizaría territorialmente. A la declaración de soberanía nacional le siguió la separación de los poderes. Toda una lección de liberalismo gaditano, hispano y por ello, también mexicano. Sin embargo, afloraba una paradoja: el nuevo Congreso, era "un constituyente con Constitución", lo cual crearía graves problemas a la hora de decidir en qué momento se respetaba la Constitución docenista y cuando podían separarse de ella, pues ésta seguiría vigente hasta la elaboración de una nueva Constitución. De momento, los diputados mexicanos se lanzaron a la tarea de construir el Estado y la nación a golpe de decreto: reformulación de la administración, configuración del ejército, elaboración de fiscalidad y hacienda, organización de la instrucción pública, etc.

Pero el punto de inflexión en este primer Congreso estuvo nuevamente en la concepción de la soberanía. Mientras los diputados asumían la establecida en la Constitución de 1812, el emperador, Agustín de Iturbide, exigía una soberanía compartida que ofreciera más poder y capacidad legislativa al ejecutivo. El debate en torno a la formación de un órgano consultivo como un Consejo de Estado permitió que las distintas posturas sobre la organización territorial y soberana de México comenzaran a aflorar. Fue Rafael Mangino, diputado por Puebla, quien planteó la cuestión. Si los consejeros fueran nombrados por los representantes de cada provincia—como se había sugerido—se estaría animando a ese "provincialismo que tan conveniente era evitar" y añadía que era preferible que las elecciones se realizasen según el

método convenido en la Constitución gaditana. El peligro de "provincialismo" planeó en la cámara. La discusión comenzó a dirimirse entre los que proponían la normativa constitucional gaditana y los que optaban por ceder mayor libertad a las provincias. El debate sobre los derechos de las provincias a estar representadas de manera proporcional e igualitaria comenzaba a tensarse y se deslizó hacia la cuestión de la soberanía. Una vez más, soberanía y representación formaban un dúo inseparable. El ejemplo estadounidense se trajo a colación para reclamar una opción federal en la organización del Estado mexicano. El silogismo era obvio. Los Estados Unidos de Norteamérica tenían una forma de gobierno republicana. Contrariamente, un Florencio Castillo muy alejado de sus planteamientos en Cádiz apostaba por una soberanía única depositada en el Congreso¹⁹. Pero la quiebra se había producido, faltaba que se materializara. La argumentación de los americanos en Cádiz respecto a la formación de una monarquía federal sustentada en la representatividad de las provincias a través de sus diputaciones provinciales se había trasladado a México. Los diputados defensores del autonomismo provincial insistían en los "derechos de las provincias" que precisamente les eran otorgados por la concepción de la soberanía nacional. José María Bocanegra lo explicitaba convenientemente: "sea cual fuere la forma de gobierno, residiendo la soberanía en la nación, como de hecho reside, los derechos de las provincias debían siempre considerarse como los principales apoyos de esta grande asociación"²⁰. Es decir, la reinterpretación de la concepción de la soberanía que se había fraguado en Cádiz, unida a la forma de elección—en donde se aprovechaban los mismos comicios para elegir a los diputados provinciales, es decir, si la base de la representación para las Cortes era la nación, la cual poseía la soberanía, la misma era utilizada para elegir diputaciones, pues en el mismo acto de elegir a los diputados nacionales se elegía también a los provinciales—era planteada en México para exigir los derechos de las provincias a ser consideradas la base sobre la que se asentaba el sistema constitucional. Era el peculiar *doctrinismo* mexicano, adaptado ahora a las nuevas circunstancias, reabsorbiendo, reinterpretando, adaptando o modificando las claves del liberalismo gaditano: la soberanía, la representación y el territorio.

¹⁹ Castillo argumentaba que no podía existir más que una sola soberanía y que el Estado-nación en construcción era una monarquía constitucional y como tal, sus provincias no eran independientes, sino que estaban representadas en el Congreso de la Nación. *ACCM*, 30 de mayo de 1822, p. 374.

¹⁸ *Actas del Congreso Constituyente Mexicano*, vol. I, 8. Vase, Rodríguez (2001: 285-320).

²⁰ *ACCM*, 30 de mayo de 1822.

La cuestión soberana durante el imperio todavía tuvo un episodio reseñable. La elección del Tribunal Supremo de Justicia, que los diputados se arrogaban en nombre de su soberanía, destó el enfrentamiento abierto entre legislativo y ejecutivo. El resultado es conocido. Turbide clausuró el Congreso y nombró una Junta instituyente para gobernar con amplios poderes. Pero no pudo llevar a efecto su proyecto, el germen federal asentado en la concepción soberana de las provincias se lo impidió. México estaba preparado para transitar su forma de Estado hacia el federalismo. La abdicación del emperador le abonó el terreno para cambiar también su forma de gobierno: la república estaba en ciernes.

EL DISEÑADOR: LA REPÚBLICA FEDERAL

El 8 de abril de 1823 México consideraba abolidas las bases fundamentales de construcción de su Estado aprobadas dos años antes: el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba sucumbían ante la caída del emperador. El tránsito a la república quedaba expedito y el instrumento para realizarlo, paradójicamente, seña la Constitución monárquica de 1812. La propuesta de Bases de República federativa mantenía una concepción de la soberanía como “única, inalienable e imprescriptible”. Por ello no se nombraba a los *Estados* de la federación en plural, sino que se hablaba de un solo Estado, el mexicano, compuesto de provincias que tendrían sus propios congresos. La presión de las provincias federalistas en el verano de 1823, con la guerra civil a punto de estallar, cristalizó en la proclamación de Guadaluajara como Estado libre y soberano de Jalisco. El debate sobre la forma de Estado, confederal, federal unitaria o centralista se produciría durante la aprobación del Acta constitutiva federal. El temor de que si se concedía la soberanía a los estados de la federación éstos acabarían separándose del gobierno central, era una preocupación compartida por varios diputados.

La cuestión de la soberanía se trató en los primeros artículos del Acta, si bien estaba presente de manera general en toda su discusión. Laureano Castorena, diputado por México, inició con su intervención la batalla en contra de la federación indicando: “el proyecto parece quiere establecer una soberanía parcial, que es la de cada estado, y una general que es la de todos los estados”²¹. La respuesta a estas indicaciones vino de la mano de las provincias

²¹ *Cronicas del Acta Constitutiva Federal*, 13 de diciembre de 1823.

más combativas. El zacatecano Santos Velez, explicaba la concepción soberana del federalismo, o más bien del confederalismo. Porque en algunos momentos, al igual que había sucedido en los debates de la Constitución norteamericana, ambos términos se intercambiaban.

[...] en cuanto a la observación del Sr. Castorena sobre la soberanía parcial y general que la primera, esto es la de cada estado, consiste en el uso de los derechos que este se ha reservado, y la segunda, ó la de todos los estados, consiste en los derechos que cada uno ha puesto á disposición de la confederación para que pueda subsistir ella y los estados que la componen [...]”²².

Las posturas eran claras y se plasmarán a lo largo de toda la discusión que iniciaba con la definición de la nación mexicana en el Acta: “La Nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del antiguo virreinato llamado N. España, en el de la capitania general de Yucatán y en el de las comandancias generales de provincias internas de Oriente y Occidente”. Por primera vez, desde 1812, la definición de nación—ahora mexicana—se separaba de lo establecido por la Constitución gaditana. Y notablemente, dado que la nación se definía por el territorio y no por los habitantes del mismo. Fue la gran ruptura, el paso adelante para desbloquear la adopción del federalismo como forma de Estado. Desde el primer artículo, el Acta deslignaba la representación y la soberanía del concepto de nación, solucionando así algunos de los problemas acontecidos en 1812 al respecto. Se iniciaba así la construcción del Estado—nación mexicano desde la territorialidad, que ya se había arrogado la soberanía en la concepción autonomista de las provincias trasladada desde el doceañismo, pero no explicaba, como veremos, la configuración del mismo. En este planteamiento, la nación era anterior a la formación de los Estados y, por lo tanto, éstos podían compartir su soberanía con aquella pero nunca subordinarla. Se proponían así las bases de un federalismo territorial y no poblacional²³. El debate seguiría con la cuestión de la soberanía. Aprobada de forma general para toda la nación en

²² *Cronicas*, sesión del 5 de diciembre de 1823, p. 216.

²³ Como ha indicado el profesor Carnagiani, “En esta forma la territorialidad institucionalizada en la década precedente destruye definitivamente la forma de gobierno unitaria y da vida a una soberanía compartida entre confederación y estados” Carnagiani (1994: 60). No podemos extendernos aquí tampoco en la tensión que se va a producir entre los estados y el Estado nacional, es decir, las luchas entre los gobiernos estatales y el de la nación, a raíz de las competencias soberanas.

el artículo tercero —“la soberanía reside radical y esencialmente en la nación”— mantenía el vínculo indisoluble entre nación y soberanía; es decir, esta vez, entre el territorio y la soberanía. El federalismo tenía vía franca para establecerse. Desvinculada la nación de su definición por los habitantes —los españoles de ambos hemisferios o los mexicanos, en este caso— e identificada ésta con la residencia de la soberanía, ahora sí podía dividirse entre las provincias, como acontecía en el artículo sexto: “sus partes integrantes son estados independientes, libres y soberanos”. Esto es, superada la definición de nación del docenismo y trasladada ésta a los territorios, la soberanía podía dividirse porque también se había superado la forma de gobierno monárquica, a su vez, por la republicana. El bucle teórico de la revolución había sustituido la soberanía del rey por la de la nación, identificada ésta con el conjunto de la sociedad y, a su vez, los mexicanos la habían hecho coincidir con el territorio. Por ello no tenía ningún sentido seguir manteniendo la monarquía como forma de gobierno, amén de la experiencia vivida durante el imperio. La identificación entre monarquía y centralismo y, república y federalismo —que la historiografía mexicana del período se encargaría de subrayar— se había materializado.

Pero esta reorientación del federalismo mexicano conformado desde los territorios tendría otras consecuencias. La reducción de la participación electoral seña una de las más significativas. Al no vincular la nación con los nacionales —en este caso los mexicanos— y, por tanto, no residir en ellos la soberanía, se hacía innecesaria la extensión del sufragio a todos para conformarla. Es decir, la nación y la soberanía no precisaban de la representación política para existir ni para ejercerse, por lo tanto, el sufragio pasaba a ser censitario, y no universal como en el docenismo. Ello explicaría también por qué al dividir la soberanía no se dividió también la nación. Más si cabe cuando esta última quedaba definida por el territorio de los estados en el Acta constitutiva. Pero precisamente por eso, porque la nación no se vinculaba a los habitantes de los estados que podían poseer un sentido de pertenencia al territorio, de identidad con sus “patrias”, es por lo que la concepción política de la nación mexicana se mantuvo unitaria. Porque lo lógico hubiera sido que al dividir la soberanía se hubiera dividido también la nación. Pero aquí se mantuvo la concepción nacional docenista identificada como indivisible y con un único Estado. Las teorías políticas del liberalismo dificultaron configurar el Estado federal con distintas naciones. De este modo, el paso de monarquía a república propició en México la construcción de un Estado-nación. Y precisamente por ello, a un Estado le correspondía una nación. Tal vez por eso en la Cons-

titución federal de 1824 se evitó definir en ninguno de sus artículos tanto la nación como la soberanía. Posiblemente porque ya se definían en el Acta constitutiva que seguía vigente hasta la proclamación de la Constitución. Quizá por evitar una posible identificación de la soberanía, y por ello de la nación, con el centro, es decir, con el Estado federal, dado que ésta se compararía entre éste y los estados. O bien porque la elaboración teórica del andamiaje federal se realizaba al mismo tiempo que su puesta en práctica. Los mexicanos se *pensaban políticamente* al tiempo que se construían como tales.

BIBLIOGRAFÍA

- ANNA, Timothy E. (1978): *The Fall of the Royal Government in Mexico City*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- ANNINO, Antonio (1994): “Soberanías en Lucha”, en Annino, A.; Castro Leiva, L.; Guerra, F.-X. (eds.): *De los imperios a las naciones. Iberoamérica*. Zaragoza: IberCaja.
- (1995): “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Annino, A. (coord.): *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- BARAGÁN, J. (1978): *Introducción al federalismo. La formación de los poderes en 1824*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- BINSON, Nettie Lee (1955): *La diputación provincial y el federalismo mexicano*. México: El Colegio de México.
- CARMAGNANI, M. (1994): “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850”, en Vázquez, J. Z.: *La fundación del estado mexicano*. México: Nueva Imagen.
- CHUST, Manuel (1999): *La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz*. Valencia/México: Fundación Instituto Historia Social/Universidad Nacional Autónoma de México.
- DE LA TORRE VILLAR, E. (1978): *La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- FRASQUET, I. (2008): *Las caras del águila. Del liberalismo a galitismo a la república federal mexicana*. Castellón: Universitat Jaume I.
- GARCÍA MONERIS, C. (2003): “El debate ‘preconstitucional’: Historia y Política en el primer liberalismo español (algunas consideraciones)”, en La Parra, E.; Ramírez, G. (eds.): *El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada*. Valencia: Biblioteca Valenciana.
- (2003): “El territorio cuartado o cómo organizar el gobierno de los pueblos”, en La Parra, E.; Ramírez, G. (eds.): *El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada*. Valencia: Biblioteca Valenciana.

- GARRIGA, Carlos y LORENTE, Marta (2007): *Cádiz. 1812. La constitución jurisdiccional*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- GUEDA, Virginia (2005): "El proceso de la independencia y las juntas de gobierno en la Nueva España (1808-1821)", en Rodríguez O., Jaime E. (coords.): *Revolución, independencia y las nuevas naciones de América*. Madrid: Mapfre.
- (2007): "La Nueva España", en Christ, M. (coord.), 1808. *La explosión juntera en el mundo hispano*. México: Fondo de Cultura Económica.
- GUERRA, François-Xavier (1992): *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanicas*. Madrid: Mapfre.
- HAMILL, Hugh (1966): *The Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Independence*. Jacksonville: University of Florida Press.
- HAMNETT, Brian (1978): *Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo, realceza y separatismo (1800-1824)*. México: Fondo de Cultura Económica.
- HOCQUET, Richard (2008): *Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- LEMOINE, Ernesto (1965): *Morelos: su vida revolucionaria a través de sus escritos y otros testimonios de la época*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MOLINER, Antonio (1997): *Revolución burguesa y movimiento juntero en España*. Lleida: Milenio.
- MORENO, Daniel A. (1972): *Derecho constitucional mexicano*. México: Porrúa.
- PORTUO VALDÉS, José María (2000): *Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- RAMASA, Emilio O. (1986): *El pensamiento político del Constituyente de 1824*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- RODRIGUEZ O., Jaime (1992): *El proceso de independencia de México*. México: Instituto Mora.
- (1996): *La independencia de la América española*. México: Fondo de Cultura Económica.
- SIERRA BRABATTA, Carlos (1983): *La Constitución federal de 1824*. México: Departamento del Distrito Federal (Col. Conciencia Cívica Nacional, 7).
- SOBERANES FERNÁNDEZ, J. L. (ed.) (1992): "El primer constitucionalismo iberoamericano", en *Ayer*: vol. 8.
- TENA RAMÍREZ, Felipe (1973): *Leyes fundamentales de México*. México: Porrúa.
- TIMMONS, Wilbert H. (1963): *Morelos. Priest Soldier Statesman of Mexico*. El Paso: Texas Western Press.

EL PRIMER CONSTITUCIONALISMO PERUANO: DE CÁDIZ AL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE

Gabriela Chiaromonte
Universidad de Padua

El 20 de septiembre de 1822 el general José de San Martín proclamó frente a los representantes reunidos en la capilla de la Universidad de San Marcos: "Desde este momento queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes". Inmediatamente salió del lugar de la reunión, mientras los diputados procedían a la elección de los cargos directivos, y el flamante presidente, Javier de Luna Pizarro, anunciaba que "ya el Congreso Constituyente del Perú estaba solemnemente constituido e instalado, que la soberanía residía esencialmente en la nación, y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa".¹

Los acontecimientos bélicos rodearon las labores del Congreso, condicionándolas física y políticamente desde su misma composición, pues los departamentos ocupados por los realistas, que se suponía entrarían a ser parte del nuevo Estado independiente (Cuzco, Arequipa, Huamanga, Puno y Huancavelica), sólo pudieron ser representados por suplentes, elegidos a la manera gaditana. Los diputados, por lo tanto, emprendieron la difícil tarea de sentar las bases de un Estado cuyos contornos, geográficos y políticos, estaban todavía por definirse. Si bien fue un comienzo, al mismo tiempo fue la culmina-

¹ *Diario de las discusiones*, tomo I (1822: 5 y 6).

- SALAS, Rubén Darío (1998): *Lenguaje, Estado y Poder en el Río de la Plata (1816-1827)*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.
- SOUTO, Nora (2008): "Unidad/Federación", en Goldman, Noemí (ed.): *Lenguaje y Revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850*. Buenos Aires: Prometeo.
- TAU ANZOATEGUI, Víctor (2001): *El poder de la costumbre. Estudios sobre el derecho consuetudinario en América hispana hasta la emancipación*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.
- TAU ANZOATEGUI, Víctor/MARKTKE, Eduardo (2003): *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*. Buenos Aires: Ed. Histórica, 7ª edición actualizada.
- TEDESCHI, Sonia (1993): "Los últimos años de una institución colonial: el cabildo de Santa Fe y su relación con otros espacios político-institucionales entre 1819 y 1832", en *Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe*, LIX, Santa Fe, Argentina.
- TERNAVASIO, Marcela (2002): *La Revolución del voto. Política y Elecciones en Buenos Aires, 1810-1852*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2004): "Construir poder y dividir poderes. Buenos Aires durante la 'feliz experiencia rivadaviana'", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, Tercera serie, núm. 2.
- (2007): *Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- TIO VALLEJO, Gabriela (coord.) (2011): *La república extramontana. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX*. Rosario: Prohistoria.
- VERDO, Geneviève (2006): *L'Indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821)*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo (1966): "El proceso constitucional de 1815 a 1819", en *IV Congreso Internacional de Historia de América*. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

OS SENTIDOS DE CÁDIS EM PORTUGAL E NO BRASIL DE 1820 A 1823

Márcia Regina Berbel
Universidade de São Paulo

O JURAMENTO DA CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA NO RIO DE JANEIRO

A Constituição de Cádiz foi jurada por D. João VI no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1821 e esteve em vigor durante 24 horas. O episódio integra um dos momentos mais conflituosos e polêmicos no período que antecede a proclamação da Independência: a chamada manifestação da Praça de Comércio. As atribuições conferidas à reunião, que se estendeu por todo o dia, são motivo de polémica entre os diversos autores que abordaram o tema. É certo que os eleitores escolhidos nas comarcas do Rio de Janeiro estavam presentes e foram convocados para indicar os deputados da província às Cortes portuguesas, reunidas em Lisboa desde janeiro de 1821. Além disso, após inúmeras controvérsias, a reunião deveria sancionar um governo para a Regência do Príncipe D. Pedro e assim consolidar o retorno de D. João a Portugal. No entanto, os manifestantes, que formaram uma pequena multidão, exigiram o juramento da Constituição espanhola de 1812, enviaram uma delegação ao Rei com nomes para o novo governo, cercaram os portos da cidade e, ao final, a reunião foi violentamente dissolvida e todas as decisões tomadas no dia 21 foram anuladas em 22 de abril.

A manifestação da Praça do Comércio expressou conflito entre diversos projetos divulgados na sede da monarquia desde o início do ano. As primei-

ras análises historiográficas, feitas no século XIX ou início do XX, destacaram as diferenças entre os ministros de D. João VI¹. As divergências oscilavam entre dois pólos e implicavam em diferentes níveis de aceitação da nova ordem constitucional. Todos preferiam a presença da família real no Rio de Janeiro, mas os mais conservadores propunham o retorno do Príncipe a Lisboa com o objetivo de controlar o movimento liberal na península. No extremo oposto estavam aqueles que preferiam a divulgação de novas Bases para a Constituição e a adesão aos princípios já anunciados pela revolução iniciada no Porto em agosto de 1820. No entanto, até mesmo os ministros partidários da adesão ao movimento constitucional pretendiam frear o ímpeto revolucionário, mas pensavam que a legitimação das Cortes permitiria a concretização de dois importantes objetivos: afastar a influência da Constituição espanhola de 1812, já assumida como referência direta pelos constituintes portugueses desde a divulgação dos mesmos critérios eleitorais em dezembro de 1820 e, paralelamente, consolidar princípios constitucionais mais moderados antes que os deputados divulgassem qualquer definição.

A divisão dos ministros e o silêncio do monarca já haviam provocado uma manifestação em 26 de fevereiro de 1821 e forçado o juramento à Constituição que deveria ser feita em Portugal. Nesse protesto de fevereiro, os participantes invalidaram dois decretos de D. João VI, representado por D. Pedro na Praça do Rossio. O primeiro estabelecia o retorno do Príncipe com poderes para interferir no processo constituinte e criava uma Comissão, indicada pelo Rei, dedicada a redigir uma Constituição para o Brasil. O segundo decreto, do dia 23, indicava os integrantes da referida Comissão: eram homens estreitamente ligados à Corte joanina desde 1808. Nesses termos, os dois decretos visavam controlar a revolução peninsular com a presença de D. Pedro e, paralelamente, isolavam a América de qualquer possível influência vinda do movimento liberal europeu. As medidas representaram vitória de uma das citadas alas ministeriais, acirraram os confrontos e geraram uma manifestação pública. Assim, anulando os dois decretos e exigindo o juramento da Constituição a ser elaborada em Lisboa, o ato público do dia 26 teria inaugurado a “aceitação do novo regime”², de acordo com algumas interpretações, por ter assegurado o processo constituinte na Europa e a observação de uma mesma Constituição em todas as partes da Monarquia.

No entanto, como foi dito, a Constituição espanhola de 1812 foi exigida e aclamada na manifestação de abril de 1821. Cabe a pergunta: o que pretendiam os manifestantes da Praça do Comércio? A exigência da Constituição espanhola não parece ter sido o principal motivo da manifestação mas, ainda assim, o juramento feito em abril foi muitas vezes reprovado e sempre esteve associado às cenas de violência que tomaram a Praça no dia 21 de abril e que já se esboçavam desde fevereiro. Naquele momento, o Conde de Palmela, ministro derrotado de D. João, referiu-se ao texto como “um monstro de política”. E finalmente, a avaliação negativa integrou parte das análises historiográficas como demonstra a apreciação feita por Oliveira Lima: “a antecipada aprovação da Constituição que as Cortes de Lisboa viessem a elaborar e que teria seguramente por modelo a Constituição de 1812, fora imposta a Dom João VI por agitadores de quartel e de rua que para tanto amotinaram tropa e população”³. E sobre o texto de Cádiz, ele afirma: “poderia ser um fetiche para os espíritos abertos à doutrina da soberania popular, mas não assegurava afinal ao Estado ultramarino aquilo que já passara a ser, expressa ou latente, sua aspiração comum e formava a base do seu desenvolvimento no porvir – a independência”⁴.

Assim, no interior das mais antigas interpretações sobre o processo que levou à proclamação da Independência, o juramento do texto espanhol no Rio de Janeiro perdia importância: para alguns autores, o novo regime já havia sido inaugurado no mês de fevereiro e dispensou a aceitação da Constituição espanhola e, para outros, este possível novo regime certamente inspirava-se no modelo de Cádiz mas, em última instância, teria sido usado como artilharia contra as inevitáveis e naturais aspirações pela independência.

As mais recentes interpretações buscam outras formas de explicação. Lucia Maria Bastos Pereira das Neves enfatiza que o governo de D. João VI procurou evitar a adoção da Constituição de Cádiz desde o início da revolução em Portugal e explica a ação de D. Pedro em fevereiro: “em verdade, o comparecimento de D. Pedro no Rossio, aceitando em nome de seu pai, as exigências dos revoltosos de nomear um novo governo e de jurar a Constituição que viesse de Lisboa, evitou tanto a implementação da Constituição espanhola até a entrada da nova Constituição portuguesa, como aconteceu na Bahia, quanto à formação de uma Junta governativa de nomeação popular, como já havia a baiana e a parense”⁵. Nesses termos, a autora relembra

¹ Destacamos consulta às seguintes obras: Varnhagen (1916), Oliveira Lima (1945 e 1972), Monteiro (1981), Souza (1960).

² Prado Junior (1972: 47).

³ Oliveira Lima (1972: 12).

⁴ Oliveira Lima (1972: 22).

⁵ Neves (2003: 249).

que a referência aos termos da constituição espanhola acompanhou o movimento português de 1820, concretizou-se na adesão parense em 1 de janeiro de 1821 e na formação da junta baiana no mês de fevereiro. Esses fatos, ocorridos antes de qualquer pronunciamento do monarca quanto à legitimidade das Cortes e antes de qualquer determinação dos deputados sobre os governos da América, forçavam o caminho de um “novo regime” português, na prática, reproduzia os termos espanhóis. Dessa forma, a ação de D. Pedro em fevereiro teria separado os dois processos para garantir a modernização no âmbito da monarquia portuguesa.

Assim, a retomada do movimento, durante os meses de março e abril, buscaria a verdadeira aceitação do novo regime e que deveria corresponder à imediata vigência da ordem constitucional, já experimentada em Portugal e garantida pela referência provisória ao texto de Cádiz. Nesses termos, a independência pleiteada no Rio de Janeiro de 1821 seria resguardada com a adoção das mesmas garantias constitucionais e teria um duplo significado: instituições fortes contra o “despotismo” e união com o Reino europeu em igualdade de condições.

Além disso, os conflitos tradicionalmente verificados entre os ministros de D. João VI representam apenas uma pequena parte dos inúmeros choques movidos por interesses sociais diversos. Cecília Helena de Salles Oliveira observa que a manifestação de 26 de fevereiro foi “resultado de cuidadosas negociações e apresentava-se como uma reação às tratativas que a nobreza emigrada e os negociantes mais abastados da cidade realizavam para obstar a pressão no sentido da regeneração da monarquia”⁶. Essa “reação” aglutinava várias pessoas e grupos sob a designação de “constitucionais” e não visualizava a separação entre os Reinos de Portugal e Brasil, pois “os mentores do movimento no Rio de Janeiro estavam articulados aos liberais vintistas portugueses”⁷. Esses homens queriam afastar a Corte do Rio de Janeiro mas, principalmente, queriam eliminar o controle que “a nobreza imigrada e os negociantes mais abastados” exerciam sobre cargos e sobre uma possível Comissão encarregada das leis para o Brasil. As cuidadosas articulações envolveram o Príncipe em uma tentativa de evitar qualquer tipo de repressão⁸. Assim, a ação de D. Pedro esteve em consonância com as aspirações dos “constitucionais” vintistas do Rio de Janeiro que, na luta contra os interesses solda-

dos pelo antigo regime, buscavam aliança com os liberais peninsulares e independência face ao despotismo, mas não incluiu a aceitação da Constituição espanhola e o reconhecimento das juntas já formadas no Pará e na Bahia.

Salles Oliveira salienta que a reunião de abril estava prevista para o dia 22 e destinava-se à escolha dos deputados do Rio de Janeiro para as Cortes de Lisboa. Um edital antecipou a reunião para o dia 21, na tentativa de evitar a chegada de todos os eleitores da província e, além disso, atribuiu novas funções aos eleitores: deveriam sancionar um decreto, previamente assinado, que determinava a partida de D. João para Lisboa, as atribuições do governo do Príncipe como Regente no Rio de Janeiro, e a relação das pessoas que deveriam compor o novo governo. Os mesmos articuladores da manifestação de fevereiro mobilizaram tropas, regimentos e manifestantes e fizeram com que a multidão aclamasse a Constituição espanhola de 1812, pois “não estavam dispostos a aceitar que pela mediação da Regência de D. Pedro, seus principais adversários continuassem na direção dos negócios públicos”⁹. De acordo com a autora, a Constituição espanhola tinha os dispositivos necessários para concretizar alguns objetivos pleiteados por esse grupo: 1) o poder soberano pertencia aos cidadãos e isto poderia evitar leis e composição de governo que perpetuasse a política do grupo dominante desde 1808; 2) a separação de poderes limitaria a ação de D. Pedro como Executivo na Regência, impedindo-o de fazer leis ou distribuir privilégios; 3) a constituição garantia direitos individuais e de propriedade, além da liberdade de imprensa e extinção da censura e, assim, protegia a ação do grupo 4) previa a organização de um Conselho de Estado para fiscalizar atos de ministros e magistrados; 5) diferenciava funções da Câmara Municipal, governo provincial e governo do Reino e, dessa forma, afastava o Regente da gerência municipal e provincial¹⁰. A “populaca” (soldados, empregados públicos, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, homens pobres) acompanhou a manifestação na expectativa de melhorar e atualizar o pagamento de soldos e salários, diminuir a cobrança de impostos e atender um rol de reivindicações contraditórias. Mobilizados pelos constitucionais, passaram a agir independentemente e questionaram, inclusive, a presença do Regente. A multidão escapou ao controle de qualquer grupo e a manifestação foi dissolvida por ordem de D. Pedro, que se valeu dos regimentos da divisão portuguesa¹¹.

⁶ Oliveira (1999: 108).

⁷ Oliveira (1999: 108).

⁸ Oliveira (1999: 124).

⁹ Oliveira (1999: 140).

¹⁰ Oliveira (1999: 141 e 142).

¹¹ Oliveira (1999: 143 e 144).

Dessa forma, a imediata adoção dos princípios inscritos na Constituição espanhola garantiria a vigência da nova ordem, integraria a Regência de D. Pedro nos termos já aprovados em Lisboa e atenderia as exigências dos constitucionais do Rio de Janeiro: garantiria, assim, independência (face ao “despotismo”) e união com o Reino de Portugal. No entanto, as garantias previstas pelo texto de Cádiz estiveram em vigor apenas durante o dia 21 e não impediram a efetivação do governo de D. Pedro nos moldes pensados inicialmente. A Regência instalada no Rio de Janeiro foi motivo de constantes atritos com as Cortes de Lisboa, mas juramento e revogação da Constituição não iniciaram e tampouco encerraram a influência de Cádiz sobre o processo constitucional português durante os anos de 1820 a 1823.

CONSTITUIÇÃO DE CÁDIS: UMA AMEAÇA PARA OS BRAGANÇAS

A complexidade dos processos de independência foi muitas vezes obscurecida diante da necessidade de legitimar a formação dos novos Estados americanos. As interpretações forjadas durante o século XIX, e diretamente atadas a este objetivo, tiveram a função de verdadeiras “prisoês historiográficas”, de acordo com a expressão utilizada por Mônica Quijada¹² e, durante muito tempo, alimentaram formulações que, de alguma forma, conferiram um certo grau de naturalidade a uma suposta luta pela independência empreendida nas antigas colônias americanas contra as respectivas dominações metropolitanas.

A reflexão sobre as relações no interior da monarquia portuguesa às vésperas da proclamação da independência do futuro Império do Brasil incorpora elementos que dificultam essa tese puramente reativa: a corte e a centralidade do governo transferiram-se para o Rio de Janeiro em 1808, o antigo e “genérico Brasil”¹³ transformou-se em Reino reconhecido pelo Congresso de Viena em 1815, o Príncipe D. Pedro permaneceu no Rio de Janeiro quando a Corte retornou a Lisboa em 1821 e a luta pelo reconhecimento da Regência deste Reino transformou-se em ação legitimadora para o anúncio do Império em 1822. Ação e reação ocorreram no interior de uma linha de continuidade que irradiava da antiga colônia e se consolidou com a permanência da dinastia de Bragança até o final do século XIX. A sepa-

ração dos Reinos da monarquia e a formação do Império do Brasil foram antecedidas por contestações que se espalharam pelos dois lados do Atlântico, evidenciando uma complexa teia que soldava interesses e insatisfações na Europa e na América.

O conjunto de reivindicações apresentadas nos anos de 1821 e 1822, em Portugal e na América portuguesa, revela um profundo questionamento do Antigo Regime e que os registros coevos apontam como “despotismo”. As possíveis fórmulas para correção dos diversos abusos cometidos pelo governo da monarquia circulavam pelo Atlântico desde finais do século XVIII. Em 1820, os já denominados liberais portugueses inspiravam-se em soluções implementadas pelo Império britânico após a independência das treze colônias; criticavam e aperfeiçoavam os experimentos franceses iniciados em 1789 e observavam atentamente o que ocorria no interior da monarquia espanhola desde 1808. Esses liberais haviam aprendido nas primeiras décadas do século que as Constituições eram registros do nascimento de novas organizações nacionais e registravam a busca de soluções para equacionar diversos desconfortamentos decorrentes de uma crise que ultrapassava os marcos da monarquia lusa.

Os liberais portugueses observaram o conjunto da experiência atlântica desde finais do século XVIII mas, seguramente, inspiraram-se diretamente nas proposições vindas da Espanha. A revolução portuguesa iniciou em agosto de 1820 em estreita sintonia com os acontecimentos da Espanha, onde o movimento liberal, retomado desde o mês de janeiro, já havia recolocado a Constituição de Cádiz em vigor no dia 9 março e contava com a reunião de deputados em Cortes desde o mês de julho. A vigência da Constituição de 1812 anunciava, como se sabe, a soberania de uma nação hispânica que se espalhava pelos dois hemisférios e, assim, previa uma representação americana escolhida a partir de critérios eleitorais já previamente definidos. Em 1820, porém, boa parte da América espanhola já se declarava dissidente e a discussão sobre a aplicação dos termos constitucionais transformava-se em negociação para conservar as províncias ainda unidas à Monarquia¹⁴.

Os liberais de Portugal estiveram em contato com os da Espanha desde o início de 1820 e, em março, já identificavam “um estado de fermentação nada equívoco, à vista dos pasquins que nestes dias tem aparecido em várias partes desta capital”¹⁵. Em abril, o representante diplomático espanhol, D.

¹² Quijada (2005).

¹³ Expressão inscrita no discurso do então ministro de Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em 1796.

¹⁴ Ver Frasquet (2008).

¹⁵ Ofício de 18 de março de 1820, in Luz Soriano, História da Guerra Civil, 3ª época, tomo VI, pp. 187/88 (doc. 38-A) p. 453.

José Maria Pando, relatou o encontro com um dos representantes liberais portugueses e futuro líder da revolução do Porto e que, de acordo com o depoimento de Pando, mostrava-se disposto a explorar a disposição dos governantes espanhóis:

o exemplo de Nápoles sugeriu a idéia de adotar desde logo a Constituição espanhola, salvo as modificações que se julguem convenientes as Cortes que serão imediatamente congregadas pela Junta. Não se trata agora de reunião a Espanha. Os direitos da Casa de Bragança serão respeitados, se conviesse em reinar constitucionalmente em Portugal (...). No caso em que a Família Real não quisesse admitir a Constituição nem regressar a Portugal, não estariam muito longe de inclinar-se à união com a Espanha. (...) a opinião daquelas províncias está decidida a sacudir um jugo tão duro como vergonhoso e que existe uma grande corrente inclinada à fusão completa de ambos os países.¹⁶

Às vésperas do pronunciamento do Porto, em 2 de agosto, Pando relatou novo encontro com os representantes do Porto e tudo indica que, nesse momento, os liberais portugueses esperavam o auxílio militar espanhol para concretizar a revolução.

Durante esses meses, acalentou-se a idéia de uma União Ibérica constitucional. O silêncio da Corte do Rio de Janeiro fazia pensar em alternativas diante de uma possível escolha pela permanência do governo luso em terras brasileiras e a idéia só foi totalmente descartada em fevereiro de 1821 quando, como já foi referido, D. Pedro aceitou a futura Constituição portuguesa em nome de seu pai. Nesses termos, esclarece-se o temor quanto ao juramento feito no Pará e na Bahia e a necessidade de afastar a Constituição Cádiz: frente às resistências do Rei português, a adesão dessas províncias poderia efetivar uma união liberal entre partes significativas dos dois Impérios.

O apelo para a América portuguesa havia sido lançado em novembro de 1820, quando os revolucionários peninsulares adotaram as instruções eleitorais espanholas inscritas na Constituição de Cádiz: definiam que “a base da representação nacional é a mesma em ambos os hemisférios”, que a proporcionalidade passava a ser o total de indivíduos da nação e que a unidade eleitoral para escolha dos deputados era a “província”. No entanto, os sinais da união com os liberais espanhóis apareciam na adoção da mesma identificação nacional, pois as instruções eleitorais adotadas pelos portugueses repetiam que a base para a eleição dos deputados “é a população composta dos indivi-

¹⁶ Apud Alexandre (1993: 458).

duos que pelas duas linhagens são oriundos dos domínios espanhóis” e o artigo 21 definia condições para identificar os “cidadãos nas Espanhas”¹⁷.

O juramento de D. Pedro em fevereiro freou o processo que, no entanto, foi retomado no Rio de Janeiro em abril de 1821. Os clamores pela Constituição espanhola no dia 21 de abril soaram como insubordinação extremada e forçaram a partida do Rei para Lisboa. No entanto, a revogação da Constituição no dia 22 esclarecia que as futuras adesões provinciais na América portuguesa deveriam ocorrer sob a Regência do Príncipe que, em nome do poder central, resguardaria os direitos da dinastia de Bragança.

CONSTITUIÇÃO DE CÁDIS: SUGESTÃO DE UM NOVO PACTO PARA A MONARQUIA PORTUGUESA

As primeiras adesões americanas ao constitucionalismo anunciado pela revolução do Porto escaparam ao controle do governo joanino e atenderam ao apelo lançado pela Junta de governo formada em Portugal, incumbida, desde novembro de 1820, da convocação das Cortes com base nos princípios inscritos na Constituição espanhola de 1812. O movimento de adesão consolidou-se com a formação de juntas locais de governo que, tanto no Pará quanto na Bahia, visaram à aglutinação de representantes dos mais diversos vetores políticos e setores sociais e, neste aspecto, repetiram a fórmula dos movimentos junteiros hispânicos. No entanto, a formação desses governos não respeitava os termos inscritos na Constituição de Cádiz e, por isso, faziam lembrar várias das proposições hispano-americanas derrotadas durante os trabalhos constituintes de 1810-1812. Dessa forma, as juntas formadas na América fugiam também ao controle dos liberais de Portugal.

O capítulo III da Constituição de 1812 regulamenta a formação dos “governos políticos” das províncias e define que residirá em um “chefe superior” nomeado pelo Rei. O chefe nomeado, verdadeiro responsável pelo governo e acompanhado do antigo “intendente”, do Antigo Regime, deveria presidir uma junta provincial formada por mais sete membros eleitos de acordo com os critérios já definidos para a escolha dos deputados às Cortes gerais.¹⁸ As

¹⁷ Santos, Clemente José dos. *Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa*, tomo I, (1820-1825), Lisboa (1883: 84-94).

¹⁸ Constituição de Espanha. “Do Governo das Províncias e Deputações Provinciais”. Lisboa: Imprensa Régia, 1820. Capítulo II.

funções eram definidas de forma a restringir a ação desses homens aos assuntos da administração política interior e a presença do intendente, ao lado de um chefe escolhido pelo Rei, efetivava o controle central e militar da ação desses governantes. Os termos escolhidos para essa regulamentação visaram o fortalecimento do poder central em 1810-1812 frente à efetivação das juntas soberanas na Europa durante as invasões napoleônicas e na América autônoma e insurgente. Os representantes americanos questionaram essas definições em Cádiz e, agora, em 1821, travavam em Madri uma violenta luta pela autonomia dessas deputações provinciais e estabeleciam uma plataforma que acompanhou a proclamação da independência do México: separação do mando civil e militar, afastamento do chefe político nomeado pelo poder central, eleições gerais para todos os membros da deputação, ampliação de funções para as deputações na gerência de recursos e na elaboração de leis específicas¹⁹.

As juntas formadas na América portuguesa retomavam os termos desse debate. No Pará, após a adesão ao chamado liberal, a junta foi formada em 1^o de janeiro de 1821, antes do início das sessões das Cortes em Lisboa, e na Bahia de 10 de fevereiro, antes que se efetivasse qualquer regulamentação dos deputados para os governos ultramarinos. Nos dois casos, a adesão ao movimento liberal implicou no afastamento das autoridades do Antigo Regime, os capitães generais nomeados por D. João VI, e que antes concentravam toda autoridade civil e militar nas antigas capitânias. Sem qualquer regulamentação além dos termos de Cádiz, os novos governos foram integralmente eleitos, dispensaram nomeação do governo central (de Lisboa ou do Rio de Janeiro) e geraram diversos confrontos com os militares alinhados com a antiga ordem²⁰.

O juramento de D. Pedro em fevereiro de 1821 e a partida de D. João no mês de abril alteraram os termos das outras adesões, como já foi referido, e os episódios verificados em Pernambuco forneceram os termos para uma nova regulamentação. Ante a formação das juntas de governo no Pará e na Bahia e, principalmente, depois do juramento à Constituição feito por D. João VI em fevereiro, o capitão general de Pernambuco, Rego Barreto, aderiu prontamente ao regime de Lisboa. Em março, proclamou as bases da futura Constituição, ordenou a escolha dos eleitores em todas as paróquias de Pernambuco, presidiu as eleições das quais saíram os representantes da

província nas Cortes e foi o primeiro a providenciar a partida dos eleitos para Lisboa, em excelentes condições de viagem²¹.

Assim, inaugurava-se outra forma de adesão. Liderada por um capitão nomeado pelo governo do Rio de Janeiro e feita depois do juramento de D. João à Constituição, os episódios expressavam obediência ao Rei português. Além disso, Rego Barreto continuava como governador da província e se recusava à formação de uma junta nos moldes daquelas formadas no Pará e na Bahia. Um novo governo provincial só foi efetivado na capital, em Recife, no final de agosto de 1821, sob pressão do movimento da vila pernambucana de Goiana, que, formando uma junta rebelde e buscando apoio dos deputados de Lisboa, fazia aberta oposição à autoridade do governador²².

As circunstâncias forçavam uma definição das Cortes portuguesas sobre os governos de Ultramar e a discussão sobre o tema iniciou já em agosto de 1821 com a presença dos primeiros representantes do Brasil: os sete deputados eleitos em Pernambuco. O debate seguiu até o final do mês de setembro e levou à aprovação do decreto aprovado em 1 de outubro. A política aprovada neste momento buscava reencontrar os termos da Constituição de Cádiz e de suas instruções em alguns pontos fundamentais: invalidava qualquer poder central (Executivo ou Legislativo) além daquele instalado em Lisboa, extinguiu a Regência de D. Pedro e todos os órgãos instalados no Rio de Janeiro desde 1808 e, como consequência, exigia o retorno do Príncipe para Portugal. Mas, paralelamente, inovava em alguns outros aspectos: reconhecia as juntas já inteiramente eleitas como legítimos governos das províncias da América (inclusive a de Pernambuco) e destituía todos os capitães generais nomeados pelo antigo regime. Os episódios de Pernambuco esclareciam que o governo de D. Pedro no Rio de Janeiro serviria de importante apoio para

²¹ Berbel (1999).

²² O movimento de Goiana ocorreu por iniciativa de Felipe Mena Calado da Fonseca, português e antigo escrivão da corregição do Ceará, e Manuel Clemente Cavalcanti de Albuquerque, ambos prisioneiros em 1817, e contou com o apoio dos senhores de engenho da redondeza. Formou uma Junta de governo em 29 de agosto de 1821 que se declarava fiel a D. João VI, governo constitucional temporário e dizia agir de acordo com as Cortes Gerais da Nação Portuguesa, sem intuito de separação. Era formada por: Dr. Francisco de Paula Gomes dos Santos, Joaquim Martins da Cunha Souto Maior, Antonio Máximo de Sousa, Manuel Silvestre de Araújo, João Carlos de Melo e Albuquerque, José Camelo Pessoa de Melo, Padre Manuel dos Reis Curado, Bernardo Pereira do Carmo, capitão José Vitoriano Delgado de Borba Cavalcanti de Albuquerque e capitão José Joaquim Coelho Lopes de Castro. Cf. Oliveira Lima: p. 88-96.

¹⁹ Chust (1999: 29-78).

²⁰ Ver Berbel (1999: cap. 2).

a resistência dos capitães governadores contra a efetivação de uma nova ordem e, assim, temendo a manutenção dessa antiga estrutura de governo, os liberais de Portugal preferiram reconhecer as juntas eleitas já instaladas em algumas províncias, mas, como contraponto, o decreto de outubro criava o cargo de governador das armas que, independente da junta de governo, deveria ser nomeado pelo poder central.

Dessa forma, o conhecido decreto foi uma tentativa de fortalecer o poder dos liberais frente à dinastia de Bragança e frente ao movimento junteiro que se espalhava na América portuguesa. Os termos dessa regulamentação são sensivelmente diferentes daqueles verificados na Constituição de Cádiz mas, no interior de uma situação que evoluía rapidamente para o descontrolo, procuravam manter o cerne da política gaditana. Tal como ocorrera na Espanha, os liberais de Portugal só reconheciam centralidade dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos órgãos instalados na Europa e negavam qualquer tipo de delegação ou representação sediada na América. Enfrentavam assim o governo instalado no Rio de Janeiro, mas inviabilizavam também qualquer efetivação da soberania no âmbito das juntas provinciais. Estas últimas seriam inteiramente eleitas e conviveriam com um governador das armas nomeado pelo poder central e, nesses termos, mando civil e militar estavam devidamente separados, tal como queriam os hispano americanos. No entanto, o envio de um “braço armado” do poder central para exercer poderes paralelos aos da junta eleita serviram de motivo para a intensificação dos conflitos e alimentou o enfrentamento entre os governos instalados em Lisboa e no Rio de Janeiro.

A CONSTITUIÇÃO DE CÁDIS NA FORMAÇÃO DO IMPÉRIO DO BRASIL

O conflito entre os governos instalados em Lisboa e no Rio de Janeiro tornou-se irremediável entre os meses de janeiro e junho de 1822. Em janeiro, D. Pedro anunciou sua desobediência ao decreto aprovado pelas Cortes em outubro de 1821 e declarou que permaneceria no Brasil com o intuito de governar um Reino jamais formalizado pelos constituintes de Lisboa. A declaração do Príncipe, seguida da formação de um ministério e de ações para o reconhecimento nas diversas províncias do Brasil, foi defendida pelos deputados de São Paulo nas Cortes como uma forma mais complexa de adesão à Monarquia portuguesa, mas jamais admitida pela maioria dos deputados portugueses. Estes últimos entendiam que o Executivo só poderia ser

exercido pelo Rei e seus ministros, diretamente submetidos às Cortes, e não admitiam qualquer delegação para uma Regência no Rio de Janeiro ou, ainda que parcialmente, para o governo eleito nas províncias. Em 3 junho de 1822, D. Pedro evocou a necessidade tantas vezes apontada pelos deputados do Brasil e, para a confecção de leis adaptadas às circunstâncias da América, convocou a eleição de deputados para formação de uma Assembléia “brasileira”. O chamado foi feito ainda como mais uma forma de integração à Monarquia portuguesa mas, na prática, correspondeu a uma declaração de independência, pois já era sabido que os liberais de Lisboa, tal como os de Cádiz ou de Madri, jamais admitiriam a efetivação de dois fóruns para exercício do Legislativo.

A convocação resultou na reunião da já denominada Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império Brasil a partir de abril de 1823. Os episódios do segundo semestre de 1822 consagraram a separação dos dois reinos da monarquia portuguesa, com a emissão de declarações de independência desde o mês de agosto e a posterior proclamação de D. Pedro como Imperador. Assim, os deputados reunidos em 1823 revelavam o empenho na construção de uma saída liberal e constitucional que pudesse inserir um novo Estado independente na ordem internacional, mas afirmação e legitimação da Independência deveriam ocorrer dentro e fora dos marcos territoriais previamente definidos pela colonização portuguesa. O envio de deputados para a elaboração da constituição do Império revelava uma aceitação que apenas se esboçava nas diversas províncias, mas que não bastava para consolidar a unidade interna, ainda questionada por conflitos de diversas naturezas que atormentavam os deputados reunidos no Rio de Janeiro²³.

Dessa forma, os deputados deveriam tratar cuidadosamente das definições referentes aos governos provinciais. A questão foi abordada na discussão sobre

²³ A adesão das Províncias do Reino do Brasil ao Império foi uma construção política que envolveu acordos entre os grupos políticos locais e os do Rio de Janeiro e, internamente, a reorganização das elites no governo de cada Província. A adesão não foi garantida apenas pela via da negociação e, em muitos casos, necessitou da intervenção armada: Lord Cochrane foi encarregado do Maranhão e do Pará e o francês Labatut era responsável pelo controle da Bahia. Importante destacar que diversos desses conflitos envolveram a participação popular. Sobre os conflitos no Maranhão: Assunção, Mathias Röhlig (2005). Sobre os conflitos em Pernambuco: Mello (2004); Bernardes (2005); Santos da Silva (2006). Sobre os conflitos no Pará: Coelho Gerardo Mártires (1993); Machado (2005); Machado (2006). Sobre os conflitos na Bahia: Graham (2005); Wasjak (2005). Sobre os conflitos em Minas Gerais: Cloacet da Silva (2005). Sobre os conflitos em São Paulo: Dellminkoff (2005).

o decreto que, aprovado em 14 de outubro de 1823, acompanhou a constituição outorgada em 1824 e norteou a legislação das primeiras décadas do século XIX no Brasil. Mas o acerto de contas para uma Independência baseada em uma Constituição, que pudesse garantir a adesão de todas as províncias do Brasil, exigia a revisão das deliberações feitas em Lisboa: elas não haviam assegurado a unidade da monarquia e tampouco garantiram a ordem interna e essa revisão implicou em um retorno aos termos aprovados em Cádiz, pois isto possibilitava o resgate de possíveis soluções abandonadas naquele momento.

O debate iniciou com a apresentação de três projetos com alguns pontos em comum e todos pretendiam a revogação do decreto aprovado pelas Cortes de Lisboa em setembro de 1821. A discussão foi feita, no entanto, com base na proposta apresentada pelo antigo deputado paulista nas Cortes de Lisboa: Antonio Carlos de Andrada. Como todos os demais, o texto iniciava com a determinação de abolir as “Juntas Provisórias de Governo, estabelecidas nas Províncias do Brasil, por Decreto das Cortes de Lisboa de setembro de 1821” e, para atingir esse objetivo, o deputado propunha um retorno aos termos da Constituição espanhola de 1812. Antonio Carlos explicou sua nova posição:

entregar a muitas cabeças a administração é lembrança que só veio à razão em delírio dos franceses. Antes dos infelizes anos de 1789 e 1790, nação alguma tinha caído em tal absurdo (...) Estava reservada aos franceses uma inovação tão perigosa, mas eles mesmos bem depressa destruíram os alicerces que tinham erguido e reduziram a administração de cada Departamento à unidade, reservando para a pluralidade só o que demandava exame e juízo.

E, em seguida, lembrou do modelo apresentado pela Constituição de Cádiz:

A Nação Espanhola que copiou tão absurdamente muitos erros dos franceses, guardou-se bem de os imitar a este respeito e colocou à testa da administração das províncias, administradores únicos com o nome de chefes políticos.

Por fim, adiantava uma explicação para a adoção das Juntas em Lisboa:

os regeneradores de Portugal que quiseram à força adotar para seu país instituições que lhe não quadravam caíram no despropósito de propor administrações policéfas nas províncias²⁴.

²⁴ Diário da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, Brasília, Edições do Senado Federal, vol. 6, tomo 1, pp. 124/125 (D.A.G.C.).

Alguns deputados questionaram os argumentos acima e buscaram dissonar a presente situação conflituosa das províncias dos possíveis objetivos estabelecidos no Decreto de outubro:

as desordens de que se queixam algumas províncias não provém do Decreto das Cortes de Portugal que instituiu os Governos; provém da sua forma, provém do defeito intrínseco da Constituição. As Cortes o que fizeram foi aprovar o sistema que os Povos haviam escolhido ... Quando as províncias abraçaram o sistema constitucional entraram a considerar-se isoladamente e segregadas do poder supremo e nomearam seus governos provinciais sem dependência e conexão com as outras províncias. O povo de cada uma se julgou Soberano ... O tempo era de revolução ... e daqui veio que em geral os Governos das Províncias eram integrados pelos mesmos que o nomearam²⁵.

Diante dessas considerações, Antonio Carlos ponderava que a manutenção de governos locais deliberativos e eleitos formaria “pequenas repúblicas com seus presidentes, e é o que não quero”²⁶. O decreto finalmente aprovado baseou-se no projeto de Antonio Carlos com algumas modificações. Expressou a opinião da maior parte dos deputados reunidos no Rio de Janeiro mas, refletindo as opiniões da fração minoritária, foi alvo de severas críticas em diversas províncias, e integrou as insatisfações que geraram a Confederação do Equador²⁷.

O decreto foi imediatamente entendido como “centralista” e essa definição integrou boa parte das interpretações divulgadas pela historiografia brasileira. No entanto, como referimos anteriormente, o revogado decreto de Lisboa recebeu a mesma apreciação quando aprovado e enviado para as pro-

²⁵ Idem, tomo I, p. 157.

²⁶ Ibidem, sessão de 21 de junho de 1822, p. 268.

²⁷ Em Pernambuco, no mês de dezembro de 1823, os deputados da província que participaram da Assembleia Legislativa chegaram ao Recife. Em 6 de junho de 1824, uma sessão pública foi realizada para examinar o decreto imperial que mandava jurar o projeto da Constituição outorgada. Em seu voto, Frei Caneca apresentava uma série de críticas ao projeto, dentre elas, afirmava sobre a organização dos governos das províncias: “Os conselhos das províncias são uns meros fantasmas para iludir os povos; porque devesse levar suas decisões à assembleia geral e ao executivo conjuntamente, isto bem nenhum pode produzir às províncias [...]” As insatisfações uniram várias províncias do Nordeste na oposição ao Império, de curta vida, mas que se auto denominou Confederação do Equador – Apud: Bernardes, Denis Antônio de Mendonça, “A ideia de pacto social e o constitucionalismo em Frei Caneca”, p. 16. In: Conferência proferida no Instituto de Estudos Avançados da USP em 14/06/96. Disponível em: <www.ica.usp.br/artigos>.

vências do Brasil. Tratava-se, na verdade, de propostas diferentes para atingir objetivos semelhantes. Os deputados optaram por não alterar sensivelmente o método eleitoral já definido em Lisboa para a formação dos órgãos provinciais, mas limitaram as liberações pertinentes a essa participação "popular", entendida como nefasta herança dos "infelizes anos de 1789 e 1790". Alinhavam-se, já nesse momento anterior à outorga de 1824, às necessidades previstas pela ordem restauradora do Congresso de Viena, mas, como pretendemos ressaltar, resgataram a política inscrita na Constituição de Cádiz para atingir os termos da desejada moderação.

BIBLIOGRAFIA

- ALEXANDRE, M. Valentim (1993): *Os Sentidos do Império*. Porto: Afrontamento.
- ASSUNÇÃO, Mathias Röhling (2005): "Miguel Bruce e os horrores da anarquia", no Maranhão, 1822-1827", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.
- BERBEL, Márcia Regina (1999): *A Nação como Artefato — Deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas 1821-1822*. São Paulo: Hucitec
- BENARDES, Denis Antonio de Mendonça (2005): "Pernambuco e sua área de influência: um território em transformação (1780-1824)", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.
- CHUST, Manuel (1999): *Las Cortes de Cádiz: ideas y acción. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*. Valencia: UNED.
- CIGET DA SILVA, Ana Rosa (2005): "Identidades políticas e a emergência do novo Estado nacional", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.
- COELHO, Geraldo Mártires (1993): *Anarquistas, demagogos e dissidentes - A imprensa liberal no Pará de 1822*. Belém: Edições CEJUP
- DOLENIKOFF, Miriam (2005): "São Paulo na Independência", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.
- FRASQUET, Ivana (2008): *Las Cortes del Águila. Del liberalismo galdiano a la república federal mexicana (1820-1824)*. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
- GRAHAM, Richard (2005): "'Ao mesmo tempo situantes e situados'. A luta pela subsistência em Salvador (1822-1823)", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.
- OLIVEIRA LIMA, Manuel de (1945): *D. João VI no Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio.
- (1972): *Movimento da Independência (1821-1822)*. São Paulo: Melhoramentos.
- MACHADO, André Roberto de Arruda (2005): "As esquadras imaginárias. No extremo norte, episódios do longo processo de independência do Brasil", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.

- (2006): *A quebra da moeda real das sociedades: a crise política do antigo regime português na província do Grão-Pará (1821-25)*. Tese defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
- MELLO, Evaldo Cabral de (2004): *A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824*. São Paulo: Editora 34.
- MONTENHO, Tobias (1981). *História do Império: Elaboração da Independência*. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP.
- NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das (2003): *Corundas e Constitucionais — A cultura política da Independência (1820-1821)*. Rio de Janeiro: Fapej/ Editora Revan.
- OLIVEIRA, Cecília H. L. S. (1999): *A Ascensão Liberal - Uma relação de mercado e projetos políticos no Rio de Janeiro (1820-1824)*. Bagança Paulista: Edusp/Icone.
- PRADO JUNIOR, Caio (1972): *Evolução Política do Brasil*. São Paulo: Brasiliense.
- QUJADA, Mônica (2005): *Modelos de interpretação sobre las independencias hispanoamericanas. Lecciones sobre federalismo*. México/Zacatecas: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Universidad Autónoma de Zacatecas.
- SANTOS DA SILVA, Luiz Geraldo (2006): "O avesso da independência: Pernambuco (1817-1824)", em Malerba, Jurandir (org.): *A Independência Brasileira — Novas Dimensões*. Rio de Janeiro: Editora FGV.
- SOUZA, Otávio Tarquínio (1960): *História dos Fundadores do Império*. Rio de Janeiro: José Olympio.
- VARNHAGEN Francisco Adolfo (1916): *História da Independência*. Rio de Janeiro: RHGB.
- WISIAK, Thomas (2005): "Itinerário da Bahia na independência do Brasil (1821-1823)", em Janesó, Isván (org.): *Independência: História e História-grafia*. São Paulo: HUCITEC.